

## **Informe Subsecretaría de Acceso a la Justicia**

### **Vigesimoquinto aniversario de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer y la aprobación de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing (1995) y Agenda Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2030.**

El objetivo de la Subsecretaría de Acceso a la Justicia es promover y garantizar el efectivo acceso a la justicia en todo el territorio nacional. Para asegurar su cumplimiento, se propicia la creación e impulso de recursos que resultan idóneos y efectivos para reclamar por la vulneración de los derechos fundamentales. Es obligación de los Estados organizar el aparato institucional de modo que todos los individuos puedan acceder a esos recursos.

Por ese motivo, el rol fundamental de la Subsecretaría importa remover los obstáculos normativos, sociales o económicos que impiden o limiten la posibilidad de acceso a la justicia, logrando asegurar su efectiva protección y goce. De allí que uno de los lineamientos estratégicos claves durante la gestión será federalizar las acciones que desde aquí se desprendan, alcanzar poblaciones vulnerabilizadas y asegurar un enfoque diferencial, innovador e interseccional con perspectiva de género para ejecutar políticas públicas con enfoque de derechos humanos.

Es una prioridad para la Subsecretaría de Acceso a la Justicia, diseñar acciones que supongan una respuesta efectiva a los desafíos propios que las personas con discapacidad, las comunidades indígenas, el colectivo LGBT, las víctimas contra los distintos tipos de violencia enfrentan en el camino durante el transito hasta acceder a la justicia y conseguir la información en derecho efectiva para su correcto ejercicio.

La agenda de trabajo de esta Subsecretaria impulsa la construcción de redes con la sociedad civil para lograr que la formación en derechos y su efectivo ejercicio y goce se acerquen a las comunidades más desaventajadas mediante la instrumentación de mecanismos adecuados para cada realidad geográfica.



*Ministerio de Justicia  
y Derechos Humanos*

La Subsecretaría centra sus esfuerzos en lograr políticas públicas que no sólo eviten y se propongan erradicar la discriminación contra las mujeres<sup>1</sup> y personas LGBT+, sino que además cuenten con una perspectiva interseccional que dé cuenta de las diversas opresiones que sufren ciertos sujetos por diferentes factores de vulnerabilidad y discriminación –como el género, la clase, la raza u origen étnico, la edad, entre otros– en el contexto socio-histórico y en las vivencias de las personas; de modo tal que la intersección de estos múltiples factores en un caso concreto puede dar lugar a formas específicas de discriminación.

Tenemos presente que las obligaciones del Estado y los derechos de las mujeres y personas del colectivo LGBT+ asociados a la violencia de género son compromisos internos así como internacionales en el marco de los derechos humanos. Consecuentemente, los objetivos de la Subsecretaría, vinculados a la violencia de género en el ámbito de su competencia, son:

- abordaje integral, es decir, alejarnos de la fragmentación actual de las respuestas estatales dadas a las mujeres, niñas/os y adolescentes y personas LGBT
- coordinación y apoyo del trabajo en las provincias
- colaboración para lograr el autovalimiento de las mujeres que son víctimas o sobrevivientes de situaciones de violencia de género
- aplicación, tanto en el diseño como en la implementación de las políticas, un enfoque de derechos humanos
- contribución de calidad a registros de información nacionales sobre la violencia de género
- diseñar y llevar adelante capacitaciones y sensibilizaciones con enfoque innovador, basadas en experiencias y estadísticas.

El trabajo de esta Subsecretaría se inscribe, necesariamente, en instrumentos internacionales como la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing (1995), la

---

<sup>1</sup> Cuando se usa el término “mujeres” se habla de mujeres cisgénero, es decir mujeres que no son trans.



Convención CEDAW, la Convención Belém do Pará, las Reglas de Brasilia. Asimismo, se enmarca en los ODS de la Agenda 2030, particularmente en lo que se llama “ODS 16+”, siendo uno de los Estados que participan del Grupo de los Pioneros para Sociedades Pacíficas, Justas e Inclusivas.

Esto, recordando que desde el 2015 el Estado argentino se enfocó en identificar los principales objetivos e iniciativas prioritarias, los cuales permitirían contribuir al desarrollo económico, promover el desarrollo humano y social y fortalecer las instituciones de la vida pública argentina. Estos 8 grandes Objetivos de Gobierno (OGs) y 100 iniciativas prioritarias fueron presentados en diciembre de 2016.

El **organigrama completo** de la Subsecretaría consta de 3 Direcciones Nacionales y diversas Coordinaciones de Programas que dependen de éstas:

- Dirección Nacional de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia (DNPYFAJ); dentro de la cual se encuentra la Coordinación del Programa Nacional de Asistencia para las personas con discapacidad en sus relaciones con la administración de Justicia y el Programa Nacional de Lucha contra la Impunidad.
- Dirección Nacional de Mediación y Métodos Participativos de Resolución de Conflictos
- Dirección Nacional de Asistencia a las Víctimas (DNAV); dentro de la cual se encuentran la Coordinación del Programa Las Víctimas contra las Violencias y la Coordinación del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de la Trata de Personas.

En el presente informe nos enfocaremos en:

1. Proyectos de la Subsecretaría



- a. Ley modelo: creación del Equipo judicial especializado en violencia doméstica, sexual e institucional
  - b. Cuerpo de Abogadas y Abogados para Víctimas de Violencia de Género
  - c. Implementación de dispositivos duales
  - d. Hospital de Derechos (con DNPYFAJ y PNUD)
2. Direcciones Nacionales y sus programas de rango inferior, de la Subsecretaría:
- a. Dirección Nacional de Víctimas
    - (i) Coordinación del Programa Nacional Las Víctimas contra las Violencias
    - (ii) Coordinación del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento de Víctimas Damnificadas por el Delito de Trata de Personas – Consejo Federal para la lucha contra la trata y explotación de personas y para la protección y asistencia a las víctimas
  - b. Dirección Nacional de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia
    - (i) Coordinación del Programa Nacional de Asistencia para Personas con Discapacidad en sus Relaciones con la Administración de Justicia (ADAJUS)
    - (ii) Centros de Acceso a la Justicia (CAJ)
  - c. Dirección Nacional de Mediación y Métodos Participativos de Resolución de Conflictos



En cuanto los **proyectos de la Subsecretaría**, y su relación con lo demandado en esta ocasión en el marco de los Compromisos de Beijing y los ODS 2030, se informa que con el objetivo de asegurar el acceso a la justicia para todas/os, se realizan los siguientes proyectos:

### **Ley modelo: creación del Equipo judicial especializado en violencia doméstica, sexual e institucional**

Este Proyecto puede enmarcarse dentro de la Plataforma de Acción de Beijing, puntualmente en:

- Objetivo Estratégico A1 (58 B)
- Objetivo Estratégico D1 (124 A, B, D, F, G, H, L)
- Objetivo Estratégico D2 (129 A, B)
- Objetivo Estratégico H1 (203 A, C, E)
- Objetivo Estratégico H3 (207 D)
- Objetivo Estratégico I2 (232 A, B, C, D, F, G, N)
- Objetivo Estratégico I3 (233 C, E)

En lo que respecta a los ODS, destacan los siguientes:

- Objetivo 5 (5.1, 5.2, 5.3, 5.6, 5.a, 5.c)
- Objetivo 10 (10.2)
- Objetivo 16 (16.1, 16.2, 16.3, 16.6, 16.7, 16.10, 16.a, 16.b)

El Equipo judicial especializado tiene por objetivo dar respuestas judiciales integrales a las víctimas de violencia doméstica, sexual e institucional. Mediante la adopción de medidas jurisdiccionales adecuadas para prevenir hechos lesivos se ayudará a poner fin a la situación de violencia, proteger y apoyar a la/s víctima/s, determinar derechos y sancionar al/los responsables. La finalidad es mitigar los efectos negativos de la violencia (victimización primaria) y que el daño sufrido por la víctima no se incremente como consecuencia de su contacto con el sistema de justicia (victimización secundaria).

Asimismo, se propone visibilizar y dar respuestas a otros grupos en situación de vulnerabilidad tales como personas adultas mayores, personas LGBT, personas con discapacidad, personas institucionalizadas y niñas/os y adolescentes. Creemos que estas personas, lejanas al estereotipo de sujeto hegemónico en una sociedad cis-hetero-patriarcal,



sufren de tipos específicos de violencia que se relacionan directamente con lo que se conoce como violencia de género, particularmente desde una perspectiva interseccional.

El Equipo judicial especializado está justificado, entre otros motivos, por razones de integralidad, economía procesal y de garantía de derechos constitucionales y derechos humanos, orientado a dar respuestas oportunas y adecuadas a las víctimas de un conflicto.

Entre los principios rectores que guían este sistema de justicia se encuentran los siguientes: acceso a la justicia y debido proceso; independencia e imparcialidad; derecho a la información; gratuidad de las actuaciones judiciales, administrativas y del patrocinio jurídico especializado; proceso oral por audiencias; intermediación; concentración y economía; eficiencia y eficacia, rendición de cuentas, buena fe, lealtad procesal y prohibición de abuso del proceso; determinación de la verdad procesal y amplitud probatoria; perspectiva de género e interseccionalidad; coordinación intrajudicial y con los demás poderes estatales; flexibilidad de las formas, protección de datos personales y notificación a las partes.

El Equipo judicial especializado se propone llevar adelante un profundo proceso de reingeniería institucional en la organización y gestión de los tribunales, aprovechando economías de escala y oficinas de gestión común. Se trata de un sistema compuesto por colegios de jueces con oficinas comunes, un/a administrador/a del Tribunal, fiscales, defensores y asesorías tutelares especializadas. Los jueces tendrían competencia unificada en civil y penal que ofrezcan (junto con fiscales y defensorxs especializadx) respuestas eficaces, integrales y coordinadas a la violencia.

Son órganos especializados con un enfoque en género, integralidad y gestión judicial. La jurisdicción se define por la modalidad de la violencia: doméstica e institucional (que incluye casos de violencia a niñxs o personas adultas mayores institucionalizadas); pero también por un tipo de violencia, la sexual (sea en la modalidad que sea). Se unifican las respuestas que hasta ahora se han visto divididas en fuero penal y fuero civil, buscando la integralidad del proceso ante un solo conflicto.

En resumidas cuentas, las principales ventajas que presenta este Equipo judicial son múltiples. En primer lugar, que se evita la fragmentación del conflicto, conflicto que siempre fue único y que al fragmentarlo en fueros civil y penal, la víctima debe dividir y duplicar, redundando en un desgaste emocional y monetario que pocas personas pueden afrontar y que se convierte en una barrera para el acceso a justicia.



En segundo lugar, es un mecanismo eficiente contra la victimización secundaria. Esto dado, no sólo por la “re-unificación” del conflicto que atraviesa la víctima, sino además, por su especialización, la cual implica un trato respetuoso de la autonomía, decisiones, vivencias e historia de cada víctima, en pos de encontrar la mejor solución para ella resguardando sus derechos.

En tercer lugar, promueve la especialización y desalienta el solapamiento de estructuras estatales dado que se compromete a unificar dentro de una misma institución las respuestas correspondientes al Poder Judicial, al Ministerio Público Fiscal, al Ministerio Público de la Defensa, los servicios de salud, etcétera. Se busca evitar que las víctimas deban recorrer largos caminos y contactarse con múltiples personas e instancias a fin de lograr justicia.

Por último, resulta una optimización de recursos a escala, tanto materiales como humanos, mejora asignaciones de funciones y roles, potencia la dirección del proceso en todas sus etapas, dota de más decisores en función de la demanda de litigios, flexibiliza la burocracia, entre otros.

El proceso de trabajo comenzó en 2016 y, para mediados de 2018, la Ley modelo y el *dossier* en el que se incluyeron documentos relevantes para su comprensión, promoción y aplicación, estaba terminado. Las principales acciones que se realizaron tendientes a su creación fueron:

- Mesas de trabajo con expertas y expertos y operadores del sistema para la elaboración de la Ley modelo. Fue revisada y comentada en conjunto con Organizaciones No Gubernamentales, asociaciones y expertos/as de la sociedad civil.
- Investigación con la Subsecretaría de Política Criminal: de datos y percepciones sobre respuestas judiciales a la violencia de género en CABA
- Relevamiento de datos de violencia de género, violencia contra personas adultas mayores y violencia sexual a niñas, niños y adolescentes
- Análisis de derecho comparado (provincial y nacional)

El *dossier* contiene: una investigación que sustenta la necesidad de creación de este Equipo judicial, una guía de acción para el diseño y puesta en uso de la infraestructura edilicia necesaria para el proyecto, un informe de políticas públicas con los rasgos más relevantes del proyecto, documentación relativa a la puesta en funcionamiento de cada área, entre otros documentos. Básicamente la Subsecretaría tiene por objetivo que las provincias comprendan la importancia de un cambio radical en el paradigma de atención y respuesta



judicial necesario para dar respuestas acorde a los derechos humanos a las mujeres, niñas/os, adolescentes, adultas/os mayores, personas LGBT+ y personas con discapacidad.

Durante la segunda parte del 2018 y el 2019, las tareas se abocan a la promoción y difusión de la Ley Modelo, sus principios, diseño y ventajas, en pos de lograr la implementación del Equipo judicial especializado. Así, se distribuyeron ejemplares de la publicación de la Ley Modelo en todos los Poderes Judiciales y Ejecutivos provinciales, en comisiones legislativas relacionadas temáticamente al Proyecto, expertas/os y tomadoras/es de decisiones.

En la provincia de Tucumán la Ley Modelo se presentó como proyecto de ley a mitad del año 2018, proceso por el cual se invitó a la Subsecretaría a participar de una serie de actividades como ser un foro social donde se discuten las ventajas y oportunidades que trae una iniciativa como esta.

### **Cuerpo de Abogadas y Abogados para Víctimas de Violencia de Género**

Con respecto al cumplimiento de los Compromisos y Plan de Acción de Beijing que implica la creación y funcionamiento del Cuerpo de Abogadas y Abogados para Víctimas de Violencia de Género, se destacan:

- Objetivo Estratégico A1 (58 B, P)
- Objetivo Estratégico A2 (61 A)
- Objetivo B1
- Objetivo Estratégico C1 (106 G, J, K)
- Objetivo Estratégico C2 (107 Q)
- Objetivo Estratégico D1 (124 A, B, D, F, G, H, K; 125 A)
- Objetivo Estratégico D2 (129 A, B)
- Objetivo Estratégico H1 (203 A, D, E)
- Objetivo Estratégico H3 (206 A, B, J; 207 D)
- Objetivo Estratégico I1 (230 M, N)
- Objetivo Estratégico I2 (232 A, B, C, F, I, N)+
- Objetivo Estratégica I3 (233 C, E)

En lo concerniente a los ODS:

- Objetivo 3 (3.7)





- Objetivo 5 (5.1, 5.2, 5.3, 5.5, 5.6, 5.a, 5.c)
- Objetivo 10 (10.2, 10.3)
- Objetivo 16 (16.1, 16.2, 16.3, 16.6, 16.10, 16.a, 16.b)

El Cuerpo de Abogadas y Abogados para Víctimas de Violencia de Género, fue creado por la Ley Nacional 27.210, promulgada en noviembre de 2015. Tiene como misión garantizar el acceso a la justicia de las personas víctimas de violencia de género en consonancia con la Ley Nacional 26.485 de Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales y hacer efectivo el ejercicio y goce de los derechos consagrados en ésta y otras normas relacionadas con la problemática.

Su principal función es “Brindar patrocinio jurídico gratuito y asesoramiento legal integral en todo el territorio nacional a personas víctimas de violencia de género en todos sus tipos y modalidades establecidas en la Ley 26.485 así como la ejercida por razones de identidad de género u orientación sexual de modo de garantizar su acceso a la justicia de manera oportuna y efectiva” (art. 2 inc. A). De este modo, el objetivo del Cuerpo es garantizar el acceso a la justicia de víctimas de violencia de género, es decir, violencia de género contra niñas, adolescentes, mujeres, personas LGBTI, entre otros grupos en situación de vulnerabilidad.

Adicionalmente, el Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las mujeres (2017-2019) dispone, en el marco de la Medida 36 “Promover el acceso a la justicia de las mujeres en situación de violencia”, la acción tendiente a “Promover la implementación del patrocinio jurídico gratuito en materia de violencia de género (Ley 27.210) en conformidad con el art. 11 inc. 5.1. a. de la Ley 26.485”.

#### 1. Implementación. Etapas.

Desde 2016, la Subsecretaría de Acceso a la Justicia se encuentra trabajando en el proceso de implementación de la Ley 27210. Para llevar adelante ello, se previó su ejecución en etapas:

##### 1.1 Primera etapa: trabajo interno (junio 2016 - marzo 2017)

Esta etapa incluyó las siguientes actividades: la elaboración de decreto de designación de la Directora Ejecutiva, la selección provisoria de las/os profesionales integrantes del Cuerpo, la elaboración de modelos de convenio, criterios para la inclusión en el Registro, selección y preparación de la sede nacional del Cuerpo, que se instaló en la ciudad de La Plata,



Provincia de Buenos Aires), diseño de lineamientos del Curso TAg, diseño del Sistema de Gestión Integral, material de difusión, entre otras.

### 1.2 Segunda etapa: (marzo 2017- 2019).

#### Registro de Aspirantes de Abogados y Abogadas para Víctimas de Violencia de Género

El 1 de noviembre del 2017 se firmó un Convenio Marco entre el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) y un Acta Complementaria (N° 1) referida a la implementación de la Ley 27.210.

En concreto, el acta complementaria tiene por objeto establecer acciones conjuntas y coordinadas a fin de implementar el Registro de Abogadas y Abogados para Víctimas de Violencia de Género, en el que se inscribirán todas/os las/os abogadas/os que ejercerán el patrocinio jurídico gratuito en las provincias, el cual será administrado por el Cuerpo.

Dicho Convenio Marco contiene un Acta de Adhesión dirigida a los colegios miembros de la FACA. En ese sentido, al día de la fecha 76 Colegios de Abogados de las provincias firmaron el acta de adhesión comprometiéndose a crear el Registro de Abogadas y Abogados para Víctimas de Violencia de Género.

También se avanzó con colegios y/o asociaciones que están fuera de la FACA. En efecto, se firmaron convenios con 3 instituciones más.

En suma, se coordinó con 76 Colegios y Asociaciones de Abogados del país, lo cual representa el 84%. La cobertura alcanza a las 23 provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El 7 de marzo de 2018, se realizó la apertura del Registro de Aspirantes de Abogadas y Abogados para Víctimas de Violencia de Género. A partir de allí, se realizaron actividades de difusión con el objeto de dar a conocer la labor del Cuerpo y los requisitos para formar parte del Registro de Abogados/as. Esto incluyó la apertura de una plataforma de debate en los foros del portal web Justicia 2020, y la inclusión de un sitio dedicado al Cuerpo de Abogadas y Abogados para Víctimas de Violencia de Género en la web del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

La inscripción al Registro de Aspirantes de Abogadas y Abogados para Víctimas de Violencia de Género se realizó hasta el 4 de mayo de 2018, a través de los Colegios o Asociaciones de Abogados/as de cada jurisdicción. Se inscribieron casi 1800 abogadas/os



de los cuales más de 1675 reúnen los requisitos de ingreso. De este modo la cobertura alcanza a las 23 provincias y a la Ciudad de Buenos Aires.

Las/os candidatas/os al Registro de Aspirantes deben cumplir con determinados requisitos como antigüedad en el título, años de ejercicio efectivo de la profesión y no contar con antecedentes penales o con sanciones disciplinarias por parte del organismo emisor de su matrícula profesional; además de aprobar el Curso de Transformación Actitudinal en género y ser seleccionadas/os por la Subsecretaría de Acceso a la Justicia.

#### Contactos con actores institucionales de las provincias

El patrocinio jurídico ofrecido por el Cuerpo se implementará a partir de mecanismos de coordinación y cooperación con el Poder Judicial, el Ministerio Público de la Defensa y Fiscal, colegios de abogadas/os, los Centros de Acceso a la Justicia y demás organismos y/o entidades de la sociedad civil, tanto de jurisdicción nacional como provincial.

En el marco de esta etapa, se está trabajando en generar relaciones institucionales dichos organismos y/o instituciones, a saber:

- Federación Argentina de Colegios de Abogados: Con fecha 1 de noviembre del 2017 se firmó un Convenio Marco entre el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) y un Acta Complementaria (N°1) referida a la implementación de la Ley 27.210.
- Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 29 de agosto de 2018 se firmó para la implementación del Patrocinio Jurídico gratuito en todo el territorio nacional a través de la colaboración de sus Cortes y Superiores Tribunales de Justicia provinciales. Actas de adhesión: Salta, Entre Ríos, Tucumán, Chaco, Corrientes, Formosa (en trámite).
- Instituto Nacional de las Mujeres, con fecha 25 de Septiembre de 2018, se firmó un convenio marco con dicha institución con el objeto de establecer acciones conjuntas para la implementación del patrocinio jurídico gratuito en todo el país.
- Convenio con la Secretaria Nacional de Niñez y Adolescencia (SENNAF): en trámite.

### Curso de Transformación Actitudinal en género (TAg)

La Subsecretaría de Acceso a la Justicia conformó un equipo de trabajo tripartito para diseñar el Curso de Transformación Actitudinal en género (TAg) dirigido a las/os abogadas/os que patrocinarán los casos de violencia de género. El equipo de trabajo se integró por:

- Profesionales de diversas disciplinas (abogadas/os, politólogas/os, psicólogas/os, entre otras) a cargo de la producción de material académico.
- Técnicos, a cargo de la elaboración de la plataforma virtual.
- Creativos, a cargo de la realización de audiovisuales y entrevistas a expertas/os.

El Curso TAg propone modificar la forma en que las/os abogadas/os se vinculan con sus casos y para ello se diseñó una metodología de aprendizaje basada en una experiencia virtual innovadora. Las diversas temáticas se trabajan en forma integral a partir de casos que buscan presentar a las/os abogadas los obstáculos y problemáticas presentes en el trabajo cotidiano. Además, el Curso TAG produjo los materiales de trabajo que incluyen herramientas audiovisuales, fotográficas, sonoras y de diseño gráfico.

El Curso TAg asegura un seguimiento de impacto cuanti-cualitativo por persona, dependencias u organismos, que servirá a su vez como insumo para mostrar avances en el cumplimiento de los compromisos internacionales contraídos por nuestro país.

El Curso de Transformación Actitudinal en género (Curso TAg), produjo los materiales de trabajo que incluyen herramientas audiovisuales, fotográficas, sonoras y de diseño gráfico.

Se diseñó la plataforma web y la prueba piloto del Curso, en la cual participarán 50 personas.

A partir del segundo semestre 2018, se implementó la primera cohorte del Curso TAg destinada a 500 abogadas/os.

En el segundo semestre de 2018, el proceso de implementación del Curso TAg se dio por etapas:

- Prueba piloto del Curso TAg: entre el 2 de julio y el 7 de septiembre de 2018, se desarrolló la prueba piloto en la que participaron más de 40 expertas/os en la temática de distintos organismos de todo el país y América Latina, tales como



juezas, funcionarias, profesoras de derecho, entre otras. El objetivo principal fue testear la herramienta, así como realizar ajustes informáticos y metodológicos.

- Capacitación a tutores/as: entre el 3 de agosto y el 14 de septiembre de 2018, se llevó a cabo la capacitación a tutores/as del Curso TAg, que, posteriormente, acompañaron el proceso educativo de las/os alumnas/os. La capacitación se brindó a 26 profesionales de diversas áreas tales como derecho, sociología, antropología, psicología, comunicación, etcétera. El objetivo de la capacitación fue brindar las herramientas necesarias para que las tutoras, agrupadas en parejas pedagógicas, desarrollen el seguimiento y evaluación de las/os participantes del Curso TAg.
- Primera cohorte (octubre- diciembre de 2018): como cualquier plataforma virtual, el Curso TAg tiene una capacidad máxima para 600 personas. Por tal motivo, se decidió dividir a la capacitación por cohorte. En la primera cohorte, participaron 556 abogadas/os de las provincias del Noreste (Chaco, Corrientes, Formosa, Misiones y Entre Ríos) y Noroeste (Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja y Santiago del Estero) y la provincia de Neuquén como parte de los compromisos asumidos por el Estado argentino en el marco del caso Ivana Rosales que tramita ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Finalmente, se incluyó en esta primera cohorte a la ciudad de La Plata, a fin de cumplimentar el plan de implementación elaborado por la Subsecretaría de Acceso a la Justicia.
- Segunda cohorte: (mayo – junio de 2019) Se incluirán a las localidades de la Provincia de Buenos Aires: Avellaneda-Lanús, Lomas de Zamora, Morón, Quilmes, San Martín, San Isidro (jurisdicción ENIA), Centro y Cuyo (Mendoza San Juan San Luis Córdoba y Santa Fe).
- Tercera cohorte: (junio – julio de 2019) Por último, la tercera cohorte se capacitará a las/os abogadas/os de las localidades de: Azul, Bahía Blanca, Junín, La Matanza, Mar del Plata, Mercedes, Moreno- General Rodríguez, Pergamino, San Nicolás, Zárate- Campana Trenque Lauquen, todas de la Provincia de Buenos Aires, así como también, CABA, Río Negro, Santa Cruz, Chubut, La Pampa y Tierra del Fuego.

El Curso TAg se encuentra trabajando en la confección de dos nuevos módulos: por un lado de Abuso sexual contra niñas, donde ya se realizaron dos reuniones con organizaciones civiles y organismos gubernamentales; y por otro parte el módulo de evidencia digital, donde se realizaron dos reuniones con expertos. Todos estos encuentros tuvieron como fin definir lineamientos para la capacitación.



### Sistema de Gestión Integral para Casos de Violencia de Género

Para garantizar un patrocinio jurídico adecuado, el Cuerpo se encuentra diseñando un software de gestión de casos (denominado “Sistema de Gestión Integral para Casos de Violencia de Género”) con el objetivo de monitorear y dar seguimiento a la labor de las/os abogadas/os del Registro Definitivo.

Específicamente, se propone analizar los casos a nivel formal (cumplimiento de plazos y movimientos de las causas) y por el otro lado, monitorear desde una perspectiva de género y derechos humanos.

### Guías de orientaciones y recursos

En línea con la misión de proporcionar herramientas a los/as profesionales patrocinantes, se está trabajando en la redacción de Guías de orientaciones y recursos para cada jurisdicción, con el propósito de otorgar información de relevancia para que los/as abogadas/os del Registro puedan realizar sus tareas desde un abordaje integral de la problemática de violencia de género.

Estos documentos contienen, en primer lugar, la Guía de orientaciones, mediante la cual se delimita la competencia de los organismos e instituciones del Estado y la Sociedad Civil, que brindan asistencia y acompañamiento a víctimas de violencia de género. En segundo lugar, se brinda información respecto a normas locales sobre violencia de género. Esto constituye una herramienta necesaria para facilitar información jurídica a los/as abogados/as que patrocinarán a las víctimas. Finalmente, el documento concluye con los recursos institucionales, que contienen los datos de contacto necesarios para brindar al profesional interviniente, un listado completo que contenga los datos de contacto de todas las instituciones reseñadas. De esta manera, el/la profesional podrá abarcar las distintas aristas que presenta la cuestión, debido a que estará informado/a sobre organismos sanitarios, legales, servicios sociales, seguridad, entre otros.

### Trabajo interministerial en el marco del Plan ENIA (Plan Nacional de Prevención y Reducción del Embarazo No Intencional en la Adolescencia)

La Resolución N° RESOL-2017-1790-APN-MDS crea el Plan Nacional de Prevención y Reducción del Embarazo No Intencional en la Adolescencia cuyo objetivo principal es



abordar la problemática del embarazo no intencional en la adolescencia desde una perspectiva integral, con enfoque de derechos, género e interculturalidad; promoviendo el ejercicio efectivo de los derechos sexuales y reproductivos. En ese sentido, el objetivo 4 del Plan se propone: *“Fortalecer políticas para la prevención del abuso y la violencia sexual y para el acceso a la interrupción legal del embarazo según marco normativo vigente”*. En ese contexto, la Subsecretaría de Acceso a la Justicia, a través del Cuerpo de Abogadas, brindará patrocinio jurídico en casos abusos sexuales contra niñas embarazadas entre 10 y 14 años.

De acuerdo al proceso de implementación gradual elaborado por la Subsecretaría de Acceso a la Justicia, el Cuerpo de Abogadas ofrecerá el servicio en las provincias del Noreste (Chaco, Corrientes, Formosa, Misiones y Entre Ríos), Noroeste (Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja y Santiago del Estero), Teniendo presente estos datos, el Cuerpo de Abogadas recibirá para su patrocinio, además de los casos de violencia doméstica, aquellos casos de niñas víctimas de abuso sexual y embarazo forzado, conforme a la coordinación con el Plan ENIA.

Para ello, se encuentra en trámite un convenio con la Secretaria Nacional de Niñez y Adolescencia y Familia (SENNAF).

Proyecto: “Promoviendo los objetivos de desarrollo sostenible a través del acceso a la justicia de personas en situación de vulnerabilidad” (PNUD)

Para el desarrollo del proceso de implementación del Cuerpo, la Subsecretaría de Acceso a la Justicia elaboró el Proyecto: “Promoviendo los Objetivos de Desarrollo Sostenible a través del acceso a la justicia de personas en situación de vulnerabilidad” el cual está siendo impulsado con la Asistencia Técnica del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la participación del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.

El proyecto ARG 16/022 tiene por finalidad la ampliar, fortalecer y crear de nuevos mecanismos de acceso a la justicia. Los mismos son complementarios y ampliatorios de los ámbitos de acción de la Subsecretaría de Acceso a la Justicia contemplados en el ODS 16, por lo que todas las acciones desarrolladas permitirán la optimización en la implementación de políticas públicas.

A tal efecto, las actividades comprendidas en este proyecto tienen como prioridad la implementación de acciones que garanticen el acceso a justicia de poblaciones en situación de vulnerabilidad social y económica, alcanzando zonas desfavorecidas del país.



Específicamente, se propone contribuir a combatir el flagelo de la violencia de género mediante la implementación progresiva del Cuerpo de Abogadas/os para Víctimas de Violencia de Género, creado por la Ley 27.210.

### 1.3 Tercera etapa: implementación del patrocinio jurídico gratuito en las provincias (abril 2019 en adelante).

Con base en las tareas de la segunda etapa, se implementará el servicio del Cuerpo en las provincias. Inicialmente, se patrocinarán casos de violencia doméstica, que abarcarán procesos civiles y penales, así como la promoción de medidas preventivas urgentes. Asimismo se incluyen patrocinio jurídico para casos de niñas y adolescentes de entre 10 a 14 años, que sean víctimas de abuso sexual y que, consecuencia de dicho abuso transiten un embarazo forzado, así como también asesoramiento jurídico en casos de interrupción legal del embarazo.

Comenzaremos primeramente con las provincias del Noreste (Chaco, Corrientes, Formosa, Misiones y Entre Ríos), Noroeste (Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja y Santiago del Estero), Neuquén y ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires.

## **Implementación de dispositivos duales**

Este Proyecto se enmarca, en lo concerniente al Plan de Acción de Beijing en:

- Objetivo Estratégico A1 (58 B)
- Objetivo Estratégico D1 (124 A, B, F, G, P)
- Objetivo Estratégico I2 (232 F, G, N)

En lo concerniente a los ODS:

- Objetivo 5 (5.1, 5.2, 5.5, 5.c)
- Objetivo 10 (10.2, 10.3)
- Objetivo 16 (16.1, 16.2, 16.3, 16.a)

A través del empleo de los dispositivos electrónicos duales en las jurisdicciones locales se procura implementar a nivel nacional un programa de protección de víctimas de violencia de género a través del uso de tecnología de seguimiento satelital. Por medio de un sistema de supervisión, monitoreo y rastreo de víctimas y agresores de violencia de género, a través de dispositivos electrónicos duales con tecnología GPS de verificación de presencia y localización dual diseñado para dar seguimiento al cumplimiento de las medidas cautelares





dispuestas judicialmente y proteger a las víctimas en aquellos casos en que exista una evaluación de riesgo determinada por la fiscalía o juzgado competente, resultando de este modo una herramienta de alerta temprana en casos de violación de las medidas cautelares en cuestión, y que trasladan la carga de efectivo cumplimiento del mecanismo de la víctima, hacia el Estado.

En 2016 comenzó la prueba piloto con 9 las provincias. Se entregaron: a Mendoza 37 dispositivos; 10 dispositivos a Chubut; 30 dispositivos a Salta; 30 dispositivos a Córdoba; 20 dispositivos a Buenos Aires; 5 dispositivos a La Pampa; 5 dispositivos a Neuquén; 5 dispositivos a Santa Fe y 4 dispositivos a Tierra del Fuego.

En 2017 se distribuyeron en el marco de una prueba piloto 144 dispositivos entre las provincias de Córdoba, Mendoza, Provincia de Buenos Aires, Salta, Chubut (1° etapa, arrancó en septiembre 2016, con un total de 120), Santa Fe, Neuquén, la Pampa y Tierra del Fuego (2° etapa septiembre/octubre 2017 con una ampliación de 24 dispositivos). Cada provincia instaló -con recursos técnicos y humanos propios- Centros de monitoreo. Se realizaron 139 implementaciones en 139 parejas (sobre una base de 120 dispositivos entregados -un dispositivo puede ser utilizado más de una vez ya que utilización está sujeta a una medida cautelar dictada por un juez que puede caer por violación de la misma y posterior detención del agresor o porque se determine su cese por no continuar existiendo peligro para la víctima-). Cada provincia cuenta con un protocolo de implementación adecuado al funcionamiento de la justicia local, para la redacción del mismo se prestó asesoramiento desde esta cartera ministerial. Desde este Ministerio se realiza un seguimiento permanente del estado de las implementaciones, dando respuesta a los inconvenientes e inquietudes de la provincia.

Hasta el 11 de junio del 2018 se continuó con la prueba piloto en las provincias informadas y se adhirieron la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Tucumán, La Rioja y Entre Ríos. A partir del 12 de junio se encuentra en marcha la implementación efectiva de los dispositivos duales (ya no se trata de una prueba piloto). Las 17 provincias argentinas que forman parte del Sistema de Supervisión, Monitoreo y Rastreo para Agresores y Víctimas de Violencia de Género en esta etapa son las siguientes: Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Provincia de Buenos Aires, Rio Negro, Salta, San Juan, Santa Fe, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán.

A final de año se distribuyeron 600 dispositivos en el territorio nacional, habiéndose implementado los mismos en 350 parejas en total.



Actualmente, las provincias donde se distribuyeron dispositivos duales son 18, habiéndose sumado Misiones en marzo 2019. En cuanto a las implementaciones, a febrero 2019, se entregaron 600 dispositivos, alcanzándose 428 implementaciones.

### **Hospital de Derechos (con PNUD y DNPYFAJ)**

En lo concerniente al cumplimiento del Plan de Acción de Beijing, el Hospital de Derechos con sus particularidades geográficas y trabajo de inserción y trazado de redes territoriales, resulta particularmente relevante en tanto:

- Objetivo Estratégico A1 (58 K, P)
- Objetivo Estratégico A2 (61 A)
- Objetivo Estratégico C2 (107 Q)
- Objetivo Estratégico D1 (124 H; 125 A, E, H)
- Objetivo Estratégico D2 (129 A, B)
- Objetivo Estratégico H3 (206 A, B, J; 207 D)
- Objetivo Estratégico I2 (232 I, N)
- Objetivo Estratégico I3 (233 C, E)
- Objetivo Estratégico L1 (274 B)

En lo que respecta a los ODS, se enmarca en:

- Objetivo 5 (5.1, 5.2, 5.3)
- Objetivo 10 (10.3)
- Objetivo 16 (16.1, 16.2, 16.3, 16.6, 16.7, 16.9, 16.10, 16.a)

El Hospital de Derechos pretende ser un centro integral de soluciones legales, buscando cubrir de la forma más extensiva las principales necesidades legales y administrativas de la zona donde se asienta. A su vez, también pretende consolidarse como el centro de referencia para los demás CAJ, recibiendo derivaciones y consultas propias de los otros centros.

Este centro, coordinará la labor de numerosos actores trabajando en red para asegurar a las personas de bajos recursos el acceso a la justicia en un sentido amplio, es decir, que el usuario encuentre no solo el diagnóstico de su problema, sino también una solución en el mismo lugar, ya sea por vías administrativas o por vía judicial con patrocinio jurídico gratuito.



Se pretenden ampliar y multiplicar las prestaciones, servicios, articulaciones y actividades del CAJ ubicado en el barrio de ONCE, y convertirlo en un centro de referencia modelo de servicios integrales de acceso a la justicia. Este Centro está ubicado en una zona de altísima confluencia de personas de bajos recursos y está situado en un inmueble de grandes dimensiones y altas potencialidades.

La concentración en un mismo edificio de las prestaciones que habitualmente se brindan en un CAJ, sumado a un anticipo de las que se brindarán en la próxima etapa junto con la presencia de distintos organismos de diferentes niveles del Estado Nacional y de la CABA, posibilitará ampliar el conocimiento de sus derechos a estas poblaciones.

Hasta su apertura, estas prestaciones se brindaban de manera atomizada y desvinculada entre sí, por lo que la posibilidad de generar un modelo piloto con estas características sirve para examinar la posibilidad de replicarlo en los grandes centros urbanos del país.

El 27 de noviembre de 2018 se inauguró el Hospital de Derechos en el barrio de Once, en la Ciudad de Buenos Aires. Actualmente, los organismos que prestan servicios en el edificio son la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, Defensa al Consumidor, Ministerio Público de la Defensa de la Nación, Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, Ministerio Público Tutelar de la Ciudad de Buenos Aires, la Procuración General de la Nación, RENAPER, ANSES, Colegio de Abogados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Registro Nacional de Reincidencia y la Dirección Nacional de Readaptación Social. Se espera poder sumar al Ministerio de Desarrollo Social y Salud de la Nación, PAMI, Superintendencia de Salud, Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires y Defensoría Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.

Por último, todos los CAJ así como el Hospital de Derechos, recaban sus intervenciones en el Sistema Informático de los Centros de Acceso a Justicia (SICAJ). Este Sistema permite contar con información fidedigna acerca de las consultas que reciben los Centros, las vinculaciones institucionales y las actividades comunitarias, datos que resultan vitales para efectuar diagnósticos sobre la política pública de acceso a la justicia y planificar acciones en cada uno de ellos. La información se desagrega por géneros, edades, situación económica, personas a cargo, entre otros detalles.

En lo que respecta a las **Direcciones Nacionales que dependen de la Subsecretaría**, estas también se centran en garantizar el acceso a la justicia a personas que, por diferentes razones, se encuentran en dificultades para ejercer sus derechos.

Dentro de la Dirección Nacional de Asistencia a las Víctimas, se encuentran las Coordinaciones de los Programas Nacionales Las Víctimas contra las Violencias y de Rescate y acompañamiento a las personas damnificadas por el delito de trata.

Tras la reglamentación de la Ley de Víctimas (Ley 27.372) se creó el Centro Nacional de Asistencia a las Víctimas de Delitos (CENAVID), que busca proteger a las personas que toleraron distintos tipos de delitos, así como coordinar su asesoramiento jurídico, psicológico y social en los centros de atención de todo el país. El CENAVID nuclea a distintos programas que ya tenía el Ministerio vinculados al tratamiento de víctimas: el programa Nacional de Lucha contra la Impunidad, el programa Las Víctimas contra las Violencias y el programa nacional de Rescate y Acompañamiento de Víctimas Damnificadas por el Delito de Trata de Personas.

### **Programa Nacional Las Víctimas contra las Violencias**

En lo concerniente a los puntos más relevantes que conectan al Programa Las Víctimas contra las Violencias y el Plan de Acción de Beijing, pueden mencionarse, entre otros:

- Objetivo Estratégico A1 (58 B, P)
- Objetivo Estratégico A2 (61 A)
- Objetivo Estratégico C1 (106 G, J, K)
- Objetivo Estratégico C2 (107 D, Q)
- Objetivo Estratégico D1 (124 A, B, F, G, H, K, L, N; 125 A, E, H, J)
- Objetivo Estratégico D2 (129 A, B)
- Objetivo Estratégico H1 (203 A, C)
- Objetivo Estratégico H3 (206 A, B, J; 207 A, D)
- Objetivo Estratégico I1 (230 D, H, I, M, N)
- Objetivo Estratégico I2 (A, F, G, I, N)
- Objetivo Estratégico J2 (243)

En lo que respecta a los ODS:

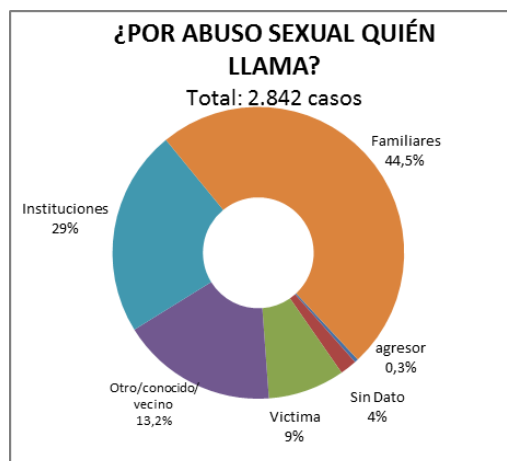
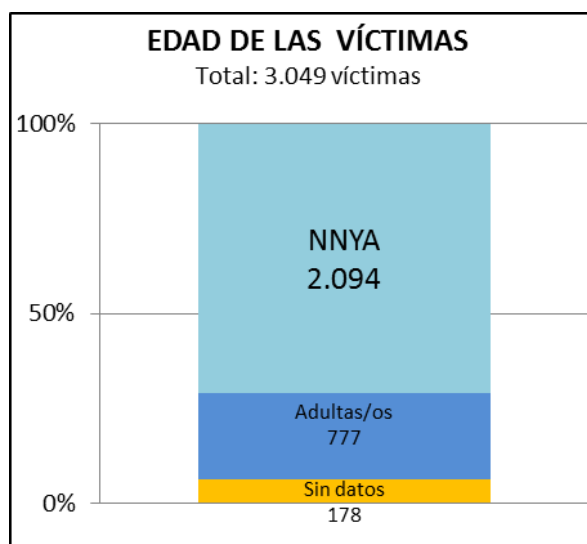
- Objetivo 3 (3.7)
- Objetivo 5 (5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.b, 5.c)
- Objetivo 10 (10.3)
- Objetivo 16 (16.1, 16.2, 16.3, 16.6, 16.7, 16.10, 16.a, 16.b)

El Programa Las Víctimas Contra Las Violencias, creado en 2006, se encuentra trabajando en dos grandes líneas de atención e intervención ante situaciones de violencia sexual y familiar para facilitar y mejorar el acceso a la justicia de las víctimas de violencias.



adolescentes. Si el hecho sucede en la Ciudad de Buenos Aires se desplaza un equipo móvil de profesionales que pertenece al mismo Programa.

En caso de que no haya un/a adulto/a referente o que el adulto se niegue a realizar la denuncia correspondiente; el Equipo jurídico junto a el/la profesional interviniente realizan el procedimiento de aviso oficial mediante un Acta de Intervención con el objeto de comunicar e impulsar a los organismos de protección o judiciales sobre los hechos de abuso sexual infantil relatados. El Equipo actúa de acuerdo a lo previsto en las normativas vigentes (Art. 30 Ley 26061).



- Línea 137: Para la atención ya acompañamiento a víctimas de violencia familiar y sexual (En CABA y en las provincias donde se replica)

La intervención de los equipos móviles y de la Central de llamadas consta de 4 instancias, pueden suceder una de ellas o todas según el caso:

- Atención telefónica: Línea gratuita 137. En esta Línea se reciben llamados las 24hs. los 365 días del año. Es atendida por psicólogas/os y trabajadoras sociales.
- Intervención y acompañamiento por parte de un equipo móvil.
- Seguimiento del caso.
- Acompañamiento jurídico (incluye los informes y oficios remitidos a la justicia).

- Violencia Familiar y Sexual:

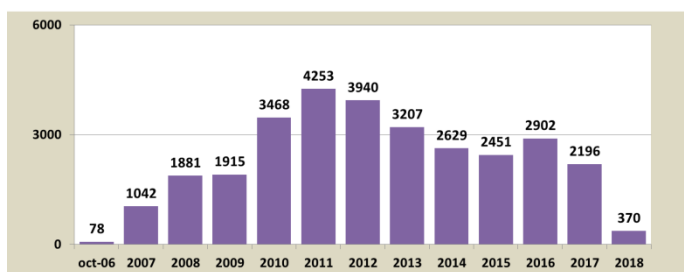


La Línea 137 es atendida por un equipo profesional especializado, integrado por psicólogos/os y trabajadoras/es Sociales, que se ocupa de escuchar, contener, orientar y, en los casos en los que se está desarrollando un episodio de violencia (familiar o sexual) al momento del llamado, decidir el desplazamiento de un equipo móvil al lugar donde se encuentra la víctima. Desde su creación en octubre de 2006 a febrero de 2018, la Línea 137 recibió en CABA 131.294 llamados.

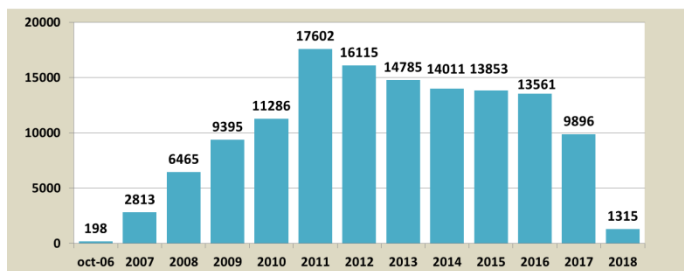
Desde el Programa no se reciben denuncias sino que se trata de una instancia previa, en la que se interviene ya sea en el sitio donde están teniendo lugar las violencias o mediante la atención telefónica por parte de profesionales especializados en las temáticas abordadas. Si la víctima lo desea, entre otras acciones que se realizan en las intervenciones “en terreno”,

se la acompaña a realizar la denuncia a los lugares pertinentes. Desde octubre de 2006 hasta febrero de 2018 se acompañaron a 30.332 víctimas de violencia familiar.

**30.332** víctimas acompañadas  
Octubre 2006 – Febrero 2018



**131.295** llamados recibidos en la línea 137  
Octubre 2006 – Febrero 2018



violencia.

- Acompañamientos jurídicos.

#### Seguimiento del caso.

El Equipo de Seguimiento refuerza el trabajo realizado por las/los profesionales en las intervenciones, así como aquellos llamados realizados a las dos líneas del Programa y que no han generado desplazamientos de los equipos móviles. Colabora en el proceso de sostenimiento de las denuncias realizadas, complementa la labor de acompañamiento legal, y procura optimizar el acceso a los recursos interinstitucionales para las víctimas de violencia familiar, en los niveles de contención, asistencia, prevención y promoción de la problemática de la



Consiste en el asesoramiento y abordaje legal, derechos que le asisten a la víctima, medidas de protección aplicables respecto del hecho de violencia acontecido. Se efectúan en todas las instancias que sean requeridos, según lo previsto en la normativa vigente, Ley N° 24.417 de Protección contra la Violencia Familiar y Ley N° 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer y demás normativa vigente y Ley N° 26.061 de Protección Integral de NNoA.

Además, cabe mencionar que el Programa realiza Jornadas de Sensibilización y Capacitación en todo el país.

Durante el año 2017, el Programa sensibilizó a 7.358 personas de todo el país en materia de violencias contra las mujeres, género y acceso a la justicia de víctimas de violencia familiar y sexual. De esas personas 6218 pertenecieron a fuerzas de seguridad (Policía Federal Argentina, Gendarmería, entre otras fuerzas). Además, realizó 75 capacitaciones en todo el país que incluyeron las provincias de Misiones, Chubut, CABA, Prov. De Buenos Aires, Tierra del Fuego, Río Negro, Córdoba, Mendoza, Jujuy, La Rioja, Chaco.

Entre enero y junio de 2018 se desarrollaron 16 talleres y jornadas de capacitación y sensibilización en las siguientes provincias: Salta (dos jornadas: una solicitada por Área de Promoción de la Equidad de las Mujeres, dependiente de la Subsecretaría de Política de Género en el Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia de Salta; y otra por la Subsecretaría de Política de Género en el Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia de Salta); Chaco (cuatro ciclos de actualización y entrenamiento en VFyS para los equipos de la Línea 137 de la provincia); Misiones (cuatro ciclos de actualización y entrenamiento en VFyS para los equipos de la Línea 137 provincial); Tucumán (una jornada destinada a Poder Judicial); Mendoza (encuentro presencial Justicia2020); y Tierra del Fuego (cuatro jornadas convocadas por la Dirección Provincial de Asuntos Electorales, en representación del Ministerio de Gobierno y Justicia de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur realizadas en las Ciudades de Ushuaia y Río Grande). En estos talleres y jornadas, se sensibilizó a 959 personas.

Entre julio y diciembre de 2018 se desarrollaron 49 talleres y jornadas de capacitación y sensibilización en las siguientes provincias:

- Tierra del Fuego (dos jornadas para funcionarios del poder judicial y profesionales del Ministerio de Desarrollo Social y una Mesa de Trabajo sobre Abuso Sexual contra NNoA organizada por UNICEF y la Subsecretaría de Acceso a la Justicia);





- Misiones (cuatro jornadas por el Ciclo de Entrenamiento en Atención a Víctimas de Violencia Familiar y Sexual para equipos de la Línea 137 de dicha provincia);
- Chaco (cuatro jornadas por el Ciclo de Entrenamiento en Atención a Víctimas de Violencia Familiar y Sexual para equipos de la Línea 137 de dicha provincia);
- Salta (dos talleres de prevención del grooming en el marco “Conectad@s Salta”, y un taller de sensibilización para Operadores del Sistema de Supervisión, Rastreo y Monitoreo para agresores y víctimas de violencia de género);
- Córdoba (Jornada organizada por UNICEF y el Ministerio de Justicia y DDHH de la Provincia; Mesa de Trabajo sobre Abuso Sexual contra NNyA que organizó conjuntamente UNICEF y la Subsecretaría de Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia y DDHH de la Nación; y dos jornadas de exposición en el 5to Congreso “Género y Sociedad”, organizado por la Universidad Nacional de Córdoba);
- Río Negro (videoconferencia sobre violencia familiar a cargo de la Dra. Eva Giberti, organizada por el Colegio de Abogados de Viedma y la Escuela de Capacitación del Poder Judicial);
- La Pampa (talleres de sensibilización para Operadores del Sistema de Supervisión, Rastreo y Monitoreo para agresores y víctimas de violencia de género);
- Entre Ríos (Jornada de Prevención del Burn out para profesionales que trabajan con problemáticas de violencia);
- Santa Fe (talleres de sensibilización y prevención del abuso sexual contra NNyA, requerido por la Confederación Argentina de Gimnasia);
- Provincia de Buenos Aires (dos talleres de información y prevención del grooming y explotación sexual contra NNyA en Ciudad de Saladillo; exposición en las IV Jornadas “Infancia, Violencia y Sociedad” organizadas por la Facultad de Derecho de la UNICEN, en la Ciudad de Azul; taller de información y prevención del grooming en Bahía Blanca; y jornada de sensibilización y prevención del abuso sexual contra NNyA destinada a docentes de nivel primaria y secundaria, y a profesionales vinculados al abordaje de esta problemática, en la ciudad de Trenque Lauquen);
- Gran Buenos Aires (jornada sobre aspectos legales de la violencia familiar y sexual, y modalidades de abordaje a sus víctimas en José C. Paz; taller de prevención del grooming y abuso sexual contra NNyA para alumnas/os de nivel secundario del Instituto La Providencia, Quilmes; jornada sobre “Violencia de Género en el marco de la complejidad de las problemáticas del consumo” en Lomas de Zamora; y jornada de prevención de violencia familiar y sexual en la UNQUI);
- CABA (talleres de sensibilización en violencia familiar y sexual y difusión de la Línea 137 en barrios de CABA: dos en la Villa 1-11-14, una en CENOAC Palermo,



una en Villa Zavaleta; dos talleres de información y prevención del Grooming y el Abuso Sexual contra NNyA para voluntarios de la Asociación Civil Acción Comunitaria; clase sobre el funcionamiento y alcances del Programa en el marco del curso para graduados y clase sobre “Intervenciones en la urgencia ante las violencias”, destinada a profesionales de posgrado (ambas en el Hospital Álvarez); Oficina multipuertas: jornada de articulación y difusión del Programa para funcionarios judiciales en asuntos de familia; Jornada sobre “Posibles intervenciones con víctimas de violencia familiar y de delitos contra la integridad sexual” destinada a los equipos profesionales de los CAVAJ, en la Casa de la Provincia de Bs. As; taller en Centro de Salud Mental N° 3 Dr. A. Ameghino; taller de prevención del grooming y el abuso sexual contra NNyA, destinado a operadores sociales de la Dirección Gral. de Prevención del Delito en Ministerio de Justicia y Seguridad de CABA; Jornadas de Sensibilización y Entrenamiento en Abordaje a Víctimas de Violencia Familiar y Sexual en Ministerio de Desarrollo Social y Salud de Nación; jornada sobre “Experiencias de intervención en el campo de la violencia de género”, destinada a alumnos/as de la carrera de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales, UBA; jornada para referentes de ESI en Ministerio de Salud de CABA; y taller de información y prevención del abuso sexual contra NNyA destinado a integrantes la asociación Voluntarios Sin Fronteras).

También, 1.900 personas fueron capacitadas en talleres a cargo de profesionales del Programa, organizados por la Secretaría de Gobierno de Modernización.

Además, en el mes de marzo de 2009 se incorporó, una asignatura obligatoria en el plan de estudios de las Escuelas de la Policía Federal Argentina. Desde entonces, las/los profesionales del Programa dictan la Asignatura “Introducción al Conocimiento, Abordaje y Prevención de las Violencias” en los distintos institutos de formación y perfeccionamiento desde una perspectiva de género y derechos humanos. Comprendiendo al necesidad de articular la labor de los Equipos del Programa en las intervenciones con víctimas de violencia sexual y familiar y así mejorar el acceso a la justicia de las personas victimizadas.

El Programa realiza una publicación periódica de sus estadísticas, en conjunto con UNICEF Argentina, en la “Serie Violencia contra niños, niñas y adolescentes”, disponible en <https://uni.cf/2CCKfJy>



## **Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata**

El PNR se enmarca así en varios de los puntos del Plan de Acción de Beijing, como ser:

- Objetivo Estratégico A1 (58 B, K, P)
- Objetivo Estratégico C1 (106 G, J, K)
- Objetivo Estratégico C2 (107 Q)
- Objetivo Estratégico D1 (124 A, B, , F, G, H, K, L, M, N, Q; 125 A, C, E, H, J)
- Objetivo Estratégico D2 (129 A, B)
- Objetivo Estratégico D3
- Objetivo Estratégico H1 (203 A, C, E)
- Objetivo Estratégico H2 (204 C)
- Objetivo Estratégico H3 (206 A, B, J; 207 D)
- Objetivo Estratégico I1 (230 H, I, M, N)
- Objetivo Estratégico I2 (232 A, B, C, D, F, G, I, N)
- Objetivo Estratégico I3 (233 C, E)
- Objetivo Estratégico J2 (243)
- Objetivo Estratégico L1 (275 A)
- Objetivo Estratégico L6 (282)
- Objetivo Estratégico L7 (283 C)

A su vez, se enmarca en los siguientes ODS:

- Objetivo 3 (3.7)
- Objetivo 5 (5.1, 5.2, 5.3, 5.5, 5.6, 5.a, 5.c)
- Objetivo 10 (10.2)
- Objetivo 16 (16.1, 16.2, 16.3, 16.4, 16.6, 16.7, 16.10, 16.a)

En virtud de los Tratados y Protocolos Internacionales firmados y ratificados por la República Argentina y con el objeto de tipificar el delito de trata de personas y establecer las medidas destinadas a prevenir y sancionar la trata de personas, como así también asistir y proteger a sus víctimas, se incorporó a nuestro plexo normativo el delito de trata de personas, a través de la Ley N° 26.364, promulgada el 29 de abril de 2008 y modificada por la ley 26.842, de diciembre del año 2012. En tal sentido, en la órbita del ex Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación, se creó la ex Oficina Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata (Resolución MJSyDH N° 2149/08), actual Programa Nacional (Resolución MJDH N° 731/12), con



dependencia funcional de la Subsecretaría de Acceso a la Justicia de la Secretaría de Justicia del actual Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

En tal sentido este Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificas por el Delito de Trata (PNR), cuenta con una Coordinación General, siendo ejercida la misma desde el año 2008 hasta la actualidad por la Lic. Zaida Gatti Su función es llevar adelante las acciones diarias del PNR y sus vinculaciones inter y extra ministeriales así como con otros organismos Nacionales e Internacionales. Asimismo integra el Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y la Protección y Asistencia a las Víctimas y el Consejo Federal para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y la Protección y Asistencia a las Víctimas, al igual que María Fernanda Rodríguez, Subsecretaria.

La misión, visión y objetivos del PNR contempla la asistencia y protección de las víctimas del delito de Trata, de manera integral, como forma de garantizar y promover el acceso a la justicia de las mismas, en pos de una respuesta efectiva.

En este orden de ideas el PNR, acompaña y brinda asistencia psicológica, médica y jurídica gratuita, a través de un equipo profesional interdisciplinario, desde el momento del allanamiento dispuesto por orden judicial hasta que las presuntas víctimas prestan declaración testimonial. En tal sentido, el PNR cuenta con una casa refugio donde se brinda la asistencia es integral, psicológica, medica, jurídica y social tendientes a la reparación efectivas de los derechos de las víctimas.

En tal sentido, el abordaje llevado adelante por el equipo del PNR, desde que se produce el rescate y se lleva a cabo el resguardo de las víctimas, informa a las mismas sobre los derechos que las asisten garantizando las herramientas suficientes que le permitan el empoderamiento ante las situaciones vividas.

Con el objetivo de evitar la vulneración de derechos de las víctimas y evitar su revictimización, en todas las etapas del proceso y a fin de responder a la demanda de los Juzgados intervinientes en las causas por Trata de Personas y Explotación, se conformó durante el año 2014 un equipo de psicólogas especialmente capacitadas en la toma de declaraciones bajo sistema de Cámara Gesell. En tal sentido se brinda asistencia, acompañamiento y toma del testimonio por parte de las profesionales psicólogas en la Sala Gesell, a fin de dar cumplimiento al artículo 250 quater del Código Procesal Penal de la Nación.



Entendiendo que se trata de víctimas que, además, son testigos fundamentales en causas judiciales, se realiza un trabajo de contención y acompañamiento permanente, con el objeto que las víctimas puedan afrontar el proceso judicial en forma activa, siendo protagonistas en el mismo, teniendo que enfrentar a sus/los explotadores.

Por estos motivos es fundamental la etapa del acompañamiento, la escucha atenta de un equipo interdisciplinario, el asesoramiento jurídico y las medidas de protección que se tomen. En casos extremos, en que se evalúan situaciones de alto riesgo, se les ofrece el ingreso a ellas, junto con su familia al Programa Nacional de Protección a Testigos, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, según los lineamientos de la Ley 25.764.

A los fines de resguardar el tránsito para la administración de justicia, por un lado se colaborando, acompañando y comunicando a las víctimas sus derechos en todas las instancias judiciales, como así también se confeccionan los informes técnicos profesionales, que son solicitados por las autoridades judiciales intervinientes y constituyen una herramienta fundamental para la sanción a los responsables del delito.

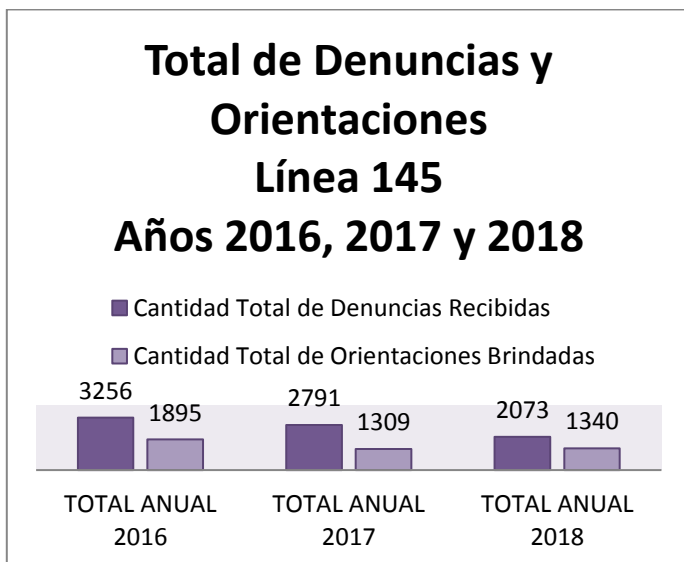
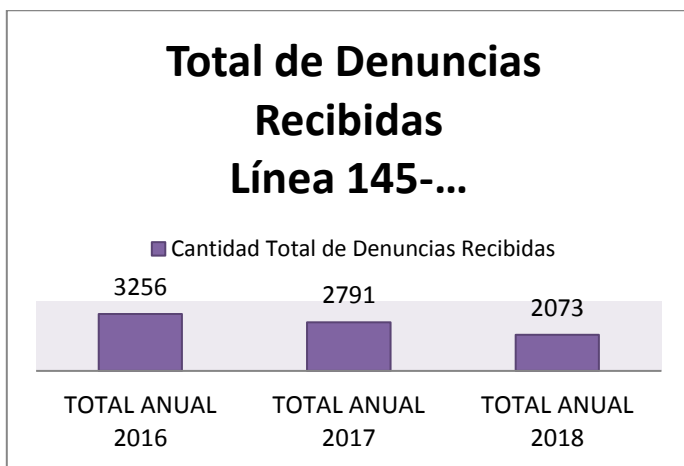
En igual orden de ideas, desde el año 2011, el PNR cuenta con la línea 145, siendo la misma un número de llamada gratuita, de alcance nacional, en el cual la atención está garantizada las 24hs. los 365 días del año, y que está facultado para recibir denuncias, relacionadas con el delito de Trata de Personas, las cuales pueden realizarse en forma anónima a los fines de preservar la identidad de las/os denunciantes.

Desde la sanción de la Ley 26.364 hasta el 25 de diciembre de 2018, se han rescatado y/o asistido un total de 13.348 víctimas.

A su vez, a través de la Línea 145 se han recibido, entre 2016 y 2018, 8120 denuncias, como puede observarse en los siguientes gráficos:



Ministerio de Justicia  
y Derechos Humanos



Por último, el PNR lleva adelante capacitaciones sobre el delito de Trata de Personas, aplicando los conocimientos legales (marco normativo), los marcos teóricos y la experiencia adquirida en las entrevistas directas con las víctimas al momento del allanamiento, el intercambio de información con los Juzgados y Fiscalías Federales y de ámbito local- provincial, a través de los informes que se elevan de las profesionales. Todas las acciones poseen un criterio en común que es la perspectiva de género y la de derechos humanos. Esto ha permitido al PNR poder interactuar con Fuerzas de Seguridad, Juzgados Federales y Fiscalías para diseñar una estrategia en común para la asistencia y protección de las víctimas en sus declaraciones y asistencias posteriores.

Las capacitaciones y campañas de sensibilización/concientización se efectúan en organismos públicos como Ministerio Público Fiscal, Ministerios Nacionales, hospitales,



escuelas, otros organismos de asistencia, como a público en general con la intención de desmitificar el lugar de la mujer en situaciones de prostitución y/o en situaciones de menoscabo en el ámbito privado, ya que la violencia de género es uno de los factores de vulnerabilidad que las mujeres sufren para sus posibles captaciones y permanencia en situación de explotación sexual.

Desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre del 2016, el PNR dictó 50 disertaciones sobre el delito de trata de personas, formas de prevención, detección y asistencia a las víctimas. En dichas capacitaciones asistieron 2257 personas en todo el país, llevándose a cabo a lo largo del territorio nacional, bajo una perspectiva de género y derechos humanos.

En el año 2017 el PNR dictó 64 disertaciones sobre el delito de trata de personas, formas de prevención, detección y asistencia a las víctimas. En dichas capacitaciones asistieron 8136 personas en todo el país, llevándose a cabo a lo largo del territorio nacional, bajo una perspectiva de género y derechos humanos.

El PNR en el año 2018 efectuó 73 disertaciones sobre el delito de trata de personas, formas de prevención, detección y asistencia a las víctimas. En dichas capacitaciones asistieron 5564 personas en todo el país, llevándose a cabo a lo largo del territorio nacional, bajo una perspectiva de género y derechos humanos.

El PNR, fue invitado a disertar por organismos Internacionales, como UNICEF - Área de Responsabilidad Social Empresaria-; Ministerio de Justicia de la República Federativa de Brasil- 4º Reunión de Comisión de Trabajo en Materia de Trafico de Seres Humanos; por organismos nacionales, provinciales y municipales, en distintas áreas de Salud, educación, género y, por organizaciones vecinales y civiles en las cuales la sensibilización y la promoción de la Línea 145 son fundamentales para su conocimiento y difusión.

Se realizaron capacitaciones a profesionales de la salud en prevención y abordaje integral de la problemática Trata de Personas, brindando herramientas para su detección e intervención. Se trabajó en capacitaciones a equipos técnicos interdisciplinarios que intervienen en casos de Trata de Personas, logrando de esa manera fortalecer a los profesionales en la efectiva asistencia a las víctimas de trata. Se llevaron a cabo capacitaciones y talleres de sensibilización a la Comunidad Educativa, alumnos y docentes. Se realizaron encuentros de formación Capacitar a referentes territoriales, brindando herramientas de detección e intervención. Se efectuaron jornadas de sensibilización dirigidas a la sociedad civil, brindando herramientas para la prevención de la trata de personas y para su denuncia y tratamiento.



Por último, en octubre de 2018 ingresó al Congreso Nacional un proyecto de ley que tiene como fin crear un fondo fiduciario público de asistencia directa a víctimas de trata y explotación de personas. El mismo fue impulsado por el Consejo Federal Para la Lucha Contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las víctimas. Sin ahondar en detalles, el proyecto de ley establece la creación de un Fideicomiso de Administración que será gestionado por Nación Fideicomiso S.A., y cuyo seguimiento estará a cargo de una Unidad Ejecutiva. Además, el referido fideicomiso se integrará con los fondos líquidos y el producido de la venta de los bienes decomisados en el marco de los procesos judiciales por trata y explotación de personas, así como del lavado de activos provenientes de dichos delitos, con sentencia firme o cuando, sin estar firme, el juez de la causa autorice la venta.

Asimismo, se establece la obligación de restituir económicamente a las víctimas de trata y explotación, con sentencia condenatoria o decisión judicial equivalente. Por otra parte, la iniciativa prevé que cuando la restitución a la víctima no pueda ser satisfecha con los bienes decomisados al condenado en la causa respectiva, el Consejo Federal deberá utilizar los recursos del “Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata” para amparar dicha situación.

Dentro de la **Dirección Nacional de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la justicia** se encuentra la Coordinación del Programa Nacional de asistencia para las personas con discapacidad en sus relaciones con la Administración de Justicia (ADAJUS), así como la gestión de los Centros de Acceso a Justicia (CAJ) y otros proyectos.

### **Programa Nacional de Asistencia para las Personas con Discapacidad en sus Relaciones con la Administración de Justicia (ADAJUS)**

Dada la labor de ADAJUS puede enmarcarse en los siguientes Objetivos Estratégicos del Plan de Acción de Beijing:

- Objetivo Estratégico A1 (58 B)
- Objetivo Estratégico C1 (106 O)
- Objetivo Estratégico C2 (107 Q)
- Objetivo Estratégico D1 (124 A, F, G, H, K, M, N; 125 B, E, H, J)
- Objetivo Estratégico D2 (129 A)





- Objetivo Estratégico H3 (206 A, B; 207 D)
- Objetivo Estratégico I2 (232 A, B, F, I, N)
- Objetivo I3 (233 C, E)
- Objetivo Estratégico J2 (243)

A su vez, en tanto los ODS:

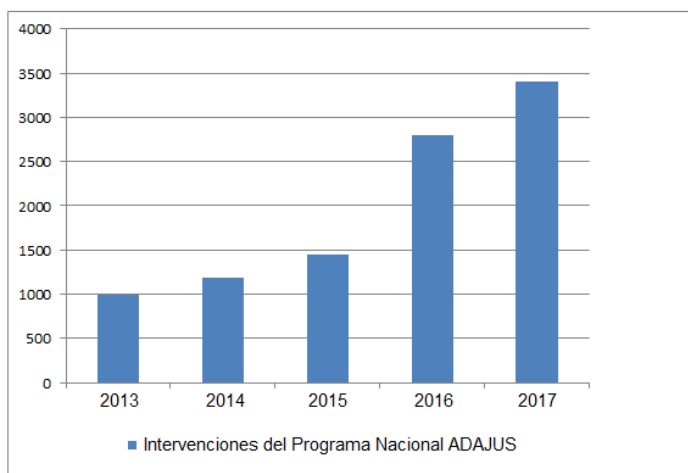
- Objetivo 5 (5.1, 5.2, 5.3, 5.5, 5.6, 5.b, 5.c)
- Objetivo 10 (10.2, 10.3)
- Objetivo 16 (16.3, 16.7, 16.10)

Las funciones del Programa Nacional ADAJUS se orientan a fortalecer los derechos de las personas con discapacidad en el ámbito de la justicia, facilitando la participación de tales personas en los procesos judiciales y administrativos. Tal participación incluye a quienes puedan estar involucradas como actores o denunciantes, demandados, víctimas o denunciados. Igualmente alcanza a testigos, así como toda otra persona con discapacidad que actúe en el marco del proceso administrativo o judicial; en todas las etapas del mismo, incluyendo las de carácter prejudicial, preliminar e instructorio. La asistencia de ADAJUS tiende a asegurar la realización de ajustes de procedimiento o ajustes razonables según sea el caso, adecuados a la edad, el género y la modalidad de discapacidad, así como garantizando que la persona con discapacidad cuente con comunicación e información de manera accesible. Para ello, ADAJUS se asume como auxiliar de la justicia, con el objeto de proponer las medidas de ajustes o apoyos en los términos del artículo 12 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPCD), tanto en el ámbito procesal, como respecto a la aplicación del derecho de fondo, incluyendo el aspecto pericial en casos donde por lo menos una de las partes involucradas sea una Persona con discapacidad, al efecto de asegurar su participación en juzgados y tribunales de justicia federales, nacionales y provinciales, en igualdad de condiciones con las demás. Esto incluye no sólo a los justiciables, sino también a abogados, operadores de justicia y otros actores directa o indirectamente relacionados con el proceso de que se trate.

En este sentido, y en cuadro siguiente, se expone información estadística sobre la cantidad de intervenciones del Programa ADAJUS en temas de su incumbencia durante los años indicados:



*Ministerio de Justicia  
y Derechos Humanos*



El Programa ADAJUS tiene, asimismo, entre sus funciones brindar capacitaciones específicas en temáticas vinculadas a los derechos de acceso a la justicia (Art. 13 CDPD) de las personas con discapacidad a magistrados, fiscales, defensores, otros operadores de justicia y personal judicial, así como a funcionarios de las administraciones públicas nacional, provinciales y municipales, y a miembros de las fuerzas de seguridad y de colegios profesionales. En este sentido, en 2016 se realizaron 51 encuentros de capacitación con un estimativo de 5.100 personas capacitadas; durante el 2017 ADAJUS realizó encuentros de capacitación en todo el territorio de la República Argentina –abarcando las provincias de Buenos Aires, Chaco, Entre Ríos, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Río Negro, Salta, Santa Fe y Tucumán, así como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires– a los que asistieron más de 3.700 personas y, en 2018 se realizaron 35 encuentros de capacitación con un estimativo de 2.600 personas capacitadas.

Los contenidos de capacitación están en línea con el modelo social y de Derechos Humanos e incluyen el abordaje de la CDPD de manera transversal, considerando la interdependencia e interseccionalidad de derechos y sujetos protegidos.

Asimismo y con relación al impacto de dichas capacitaciones, de las encuestas de satisfacción que se realizaron entre los asistentes a dichos encuentros y jornadas, surge un porcentaje de 96% de cumplimiento de expectativas con los contenidos brindados; una percepción del 89% con relación a la suficiencia de los contenidos impartidos, y 97% referido a la utilidad encontrada en las capacitaciones.

Por último, ADAJUS participa, junto a la oficina del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en el marco del Innovation Facility 2017, en la búsqueda de soluciones integrales frente a las barreras que impiden el acceso a justicia de las mujeres



Sordas e hipoacúsicas que son víctimas de violencia de género. Así, comenzaron reuniones con las organizaciones de la sociedad civil que llevan adelante el Programa “Sordas Sin Violencia” para trabajar conjuntamente y de manera innovadora. La iniciativa fue creada como una oportunidad para aprender colectivamente y poner en diálogo diferentes perspectivas y opiniones que en un futuro permitan transformar las políticas públicas, adaptarlas y hacerlas realmente inclusivas.

El Taller es una instancia que promueve la participación de distintos decisores/as institucionales que forman parte del entramado responsable de implementar políticas que promueven el acceso a la justicia de mujeres con discapacidad auditiva con el objetivo de:

- Conocer distintas experiencias desarrolladas a nivel internacional para promover el acceso a la justicia de personas con discapacidad (especialmente, mujeres con discapacidad auditiva) identificando obstáculos, desafíos e inconvenientes observados.
- Analizar distintas acciones y políticas que se están instrumentando para promover la adecuación de los servicios y dispositivos y la accesibilidad de información y comunicación.
- Impulsar el desarrollo de prácticas inclusivas para promover la accesibilidad de mujeres con discapacidad auditiva víctimas de violencia de género en el acceso a la justicia.

### **Centros de Acceso a Justicia**

Las tareas de la Dirección Nacional de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia entonces se enmarcaría en las siguientes medidas del Plan de Acción de Beijing:

- Objetivo Estratégico A1 (B, K, P)
- Objetivo Estratégico A2 (61 A)
- Objetivo Estratégico C2 (107 Q)
- Objetivo Estratégico D1 (124 A, B, G, H, K, L, M, N, Q; 125 C, E, H, J)
- Objetivo Estratégico D2 (129 A, B)
- Objetivo Estratégico H2 (204 C)
- Objetivo Estratégico H3 (206 A, B; 207 A, D)
- Objetivo Estratégico I1 (230 M, N)
- Objetivo Estratégico I2 (232 A, F, G, I, N)
- Objetivo Estratégico I3 (233 C, E)

- Objetivo Estratégico L1 (274 B)

En lo que respecta a los ODS, se destacan los siguientes:

- Objetivo 5 (5.1, 5.2, 5.3, 5.5, 5.c)
- Objetivo 10 (10.2, 10.3, 10.7)
- Objetivo 16 (16.1, 16.2, 16.3, 16.6, 16.7, 16.9, 16.10, 16.a, 16.b)

Los Centros de Acceso a la Justicia (CAJ) son oficinas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación distribuidas en todo el territorio nacional que proveen servicios de atención legal, primaria, integral y comunitaria a poblaciones en situación de vulnerabilidad. Asesoran, asisten y acompañan a personas que enfrentan barreras para el ejercicio de sus derechos o experimentan conflictos interpersonales o legales.

Cada Centro está conformado por un equipo interdisciplinario de abogados/as, psicólogos/as, trabajadores sociales, mediadores comunitarios y personal administrativo capacitado para brindar una atención integral. Los CAJ procuran hacer realidad servicios, derechos y beneficios definidos por la administración pública y facilitar mecanismos de resolución de conflictos entre privados, promoviendo soluciones alternativas y acceso a los poderes judiciales.

Están presentes en cada una de las provincias argentinas con oficinas propias y realizan itinerancias (algunas de ellas fijas una o dos veces por semana) en zonas con habitantes en situación de extrema marginación. Además, puntualmente con la Provincia de Buenos Aires, el objetivo fue lograr también por primera vez la presencia equitativa del servicio en todos los partidos del primer y segundo cordón del Área Metropolitana de Buenos Aires con indicadores sociodemográficos de vulnerabilidad significativos.

La equidad geográfica federal es uno de los principios fundamentales que organiza la tarea de la Dirección, por eso esta apertura constituye un avance central en ese camino.

Las principales funciones de los CAJ son:

1. Orientación y asesoramiento

Asesoran sobre los problemas legales de las personas y los derechos involucrados en su consulta, brindando asistencia directa para su resolución. Además de las oficinas ubicadas en todo el territorio nacional, la Dirección cuenta con una línea gratuita para consulta, asistencia y derivación 0800 222 3425.

2. Asistencia y patrocinio jurídico

Acompañan y asisten profesionalmente a las personas para realizar gestiones administrativas y conseguir patrocinio jurídico, en caso de que lo requieran.

Los CAJ realizan derivaciones a la Red Federal de Patrocinio Pro Bono (integradas por Universidades, Colegios de abogados, ONGS) y derivaciones asistidas a otras dependencias como defensorías oficiales, defensorías del pueblo, fiscalías, centros de mediación etc.

### 3. Acompañamiento psicosocial

El equipo psicosocial de cada Centro acompaña y asesora a las personas en orden a su auto-reconocimiento como sujetos de derechos.

### 4. Mediaciones comunitarias

Efectúan mediaciones comunitarias para intentar resolver conflictos familiares, vecinales, económicos, de consumo, laborales, etc.

### 5. Actividades comunitarias

Organizan jornadas, talleres y grupos de trabajo para fortalecer las capacidades comunitarias en el ejercicio de derechos.

### 6. Asistencia para derechos y prestaciones sociales

Brindan orientación y facilita el acceso a otras agencias del Estado que gestionan prestaciones sociales (DNI, partidas, gestiones ante ANSES, Tarifa Social, Certificados de Antecedentes Penales, etc.).

### 7. Servicios itinerantes y descentralizados

Una de las principales tareas que realizan los CAJ es la realización de acciones territoriales (itinerancias) para potenciar el acercamiento a la población y la articulación institucional en los distintos territorios. Los CAJ también realizan itinerancias permanentes en lugares fijos de atención como ser comedores infantiles, salas de salud u otro lugar con esas características.

En cuanto a los logros centrales 2016-2018 se destacan:

- Realización de la Primera Encuesta Nacional de Necesidades Jurídicas Insatisfechas (NJI) a fin de determinar las dificultades que presentan distintos tipos de población en relación a derechos no satisfechos adecuadamente. Además del muestreo



cualitativo, realizado en convenio con la Universidad de Buenos Aires, se realizó en cada región una sesión de análisis de los resultados extraídos. Para la metodología se realizaron entrevistas a 2800 personas mayores de 16 años de distintos estratos poblacionales, de 103 localidades distribuidas en 6 regiones del país.

La Encuesta reveló problemáticas vinculadas a cuestiones de género, especialmente en el ámbito familiar, por lo que se reforzaron las capacitaciones y sensibilizaciones a fin de que los profesionales en los CAJ puedan identificar posibles situaciones de violencia de género, a fin de acompañar y asesorar adecuadamente a quienes se acercan a estos espacios.

- Acciones de mejoramiento de infraestructura de los Centros y de conectividad a internet.
- Elaboración de programas de capacitación permanente al personal de los CAJ en diferentes temáticas con el fin de brindarles herramientas para atender consultas, realizar itinerancias, generar vinculaciones institucionales y comunicarse con la población en la que se asienta cada Centro.
- Implementación de un sistema informático para el registro de las consultas (SICAJ) para la sistematización y el seguimiento de las consultas. El SICAJ permite realizar estadísticas en tiempo real y extraer conclusiones para mejorar la atención. A su vez, se firmaron convenios con la Procuración General de la Nación, con el Ministerio de Justicia y la Procuración General de la provincia de Buenos Aires y con el Sedronar para cederles el software a fin de que lo adapten en sus respectivos centros de atención.
- Incremento de consultas interanual en un promedio de 55% entre 2017 y 2018.
- Certificación del sistema de gestión de la calidad de los CAJ. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación certificó las Normas de Calidad ISO 9001:2008 en 75 procesos de gestión y atención ciudadana.
- Producción de guías informativas para que los/as consultantes conozcan, tengan disponibles y utilicen efectivamente las herramientas y mecanismos institucionales para ejercer sus derechos, hacer que se cumplan las obligaciones estatales y resolver sus conflictos. Algunas de las guías realizadas incluyen temas como “Personas Migrantes”, “Tarifa social”, “Discapacidad” y “Relaciones de Familia”.
- Incremento en la cantidad de consultas recibidas y actividades comunitarias realizadas: 2017 terminó como un año de gran aumento de las consultas recibidas. Se atendieron más de 300 mil consultas (321.756, lo cual significa un promedio de 1293 consultas por día. Las mujeres representaron un 67% del total. Del total de consultantes, son 177.540 las personas que concurrieron por primera vez a un Centro. Durante el segundo semestre de 2017 se registraron 170.097 consultas, es



*Ministerio de Justicia  
y Derechos Humanos*

decir que se produjo un incremento del 25% en relación al primer semestre del año, en el cual se recibieron 136.621 consultas. Los temas más consultados del período estuvieron vinculados con seguridad social (19,5% del total), relaciones de familia (15,19%) y vivienda (6,8%).

A la pregunta de cómo las personas se acercaron al CAJ en el último semestre de 2018, un 24,4% lo hizo por recomendación, un 20,26% respondió que ya había concurrido con anterioridad y un 6,6% se acercó a través de la folletería.

Además, los CAJ realizaron 909 actividades comunitarias (talleres, charlas informativas, operativos territoriales) y 2002 actividades institucionales con organismos estatales y actores de la sociedad civil.

- Programa de capacitación interna: se comenzó a implementar a inicios de 2017 basado en tres ejes: introducir a empleados y empleadas ingresantes a la labor de los CAJ; profundizar conocimientos sustantivos de temas que son materia de consulta permanente y generar talleres sobre habilidades y capacidades prácticas para la actividad que se realiza en los Centros. Puntualmente se realizaron capacitaciones en cuestiones de género e incluso se diseñaron Guías de acción para casos de violencia de género, tanto para consultantes como para los profesionales de los CAJ.

Se encuentran proyectos en marcha para potenciar a los CAJ (junto al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo –PNUD-), los cuales son:

1. Hospital de Derechos

El Hospital de Derechos implica un desarrollo superior de atención al que brindan los CAJ. Se procurará atender prácticamente todos los problemas legales in situ para evitar que las personas más vulnerables deban ir de un lugar a otro para resolverlos. El Hospital de Derechos, ubicado en el barrio de Once —punto de confluencia entre Gran Buenos Aires y CABA—, será una institución orientada a la búsqueda de soluciones integrales y de confluencia entre las agencias de distintas jurisdicciones que prestan servicios relacionados con el acceso a la justicia.

Tendrá las siguientes características:

- Concentrará, en un mismo edificio de las prestaciones que habitualmente se brindan en una CAJ.
- Presencia de distintos organismos de diferentes niveles del Estado Nacional y de CABA posibilitará ampliar la conciencia de sus derechos a estas poblaciones.



- Atención por niveles de complejidad:
- Recepción y derivación: realiza una atención inicial rápida e identifica el área dentro del Hospital al que deberán dirigirse los consultantes. Ofrece a la persona que asiste al CAJ un chequeo/ análisis de su situación de salud legal que realizará el área de Diagnóstico y Orientación.
- Diagnóstico y orientación: Efectuará orientaciones básicas al consultante y podrá realizar trámites para las consultas que no requieran gestiones complejas.
- Gestiones prejudiciales y mediaciones comunitarias (esta área estará a cargo de “accionantes”: personas entrenadas especialmente para resolver conflictos jurídicos evitando su judicialización).
- Esta área es el de mayor nivel de complejidad y se abocará al patrocinio jurídico, mediaciones prejudiciales y recepción de denuncias.

## 2. Red de patrocinio jurídico gratuito

La Red Federal de Patrocinio Jurídico Gratuito es una iniciativa que permite que los Centros de Acceso a Justicia (CAJ) deleguen casos que requieren de abogados/as para acceder a los distintos poderes judiciales del país.

Si bien la gran mayoría de las consultas que llegan a los CAJ se resuelven sin necesidad de acudir a la justicia, resulta necesario derivar adecuadamente la porción de casos que requieren de una instancia judicial. Para ello, se han implementado tres dispositivos diferentes que involucran referentes relevantes en esta materia: colegios públicos de abogados/as, asociaciones privadas de abogados/as, universidades y ONG.

Los detalles de la composición de la Red Federal de Patrocinio Jurídico Gratuito se encuentra disponible en <https://bit.ly/2HQQTiI>.

Por último, la **Dirección Nacional de Mediación y Métodos Participativos de Resolución de Conflictos** funciona en el marco de los siguientes Objetivos Estratégicos de Plan de Acción de Beijing y los Objetivos de Desarrollo Sustentable:

- Objetivo Estratégico A1 (P)
- Objetivo Estratégico A2 (61 A)
- Objetivo Estratégico C2 (107 Q)
- Objetivo Estratégico D1 (124 K, L, M, N; 125 C, H)
- Objetivo Estratégico D2 (129 A, B)





- Objetivo Estratégico H3 (206 A, B; 207 D)
- Objetivo Estratégico I2 (232 A, B, F, G, I, N)
- Objetivo Estratégico I3 (233 C, E)

En lo que respecta a los ODS, se destacan los siguientes:

- Objetivo 5 (5.5, 5.c)
- Objetivo 10 (10.2, 10.3)
- Objetivo 16 (16.1, 16.2, 16.3, 16.6, 16.7, 16.10, 16.a)

El Centro de Prevención y Resolución de Conflictos de la Dirección Nacional de Mediación y Métodos Preventivos de Resolución de Conflictos del Ministerio de Justicia de la Nación se constituyó en el año 1994 como resultado del Plan Piloto de Mediación aprobado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Entre las metas que el Centro se propone se encuentra la de garantizar el más pleno e irrestricto acceso a la Justicia, ofreciendo servicios de mediación prejudicial y comunitaria a personas que se encuentran en condición de vulnerabilidad. Cabe destacar que el Centro también realiza mediaciones intrajudiciales, derivadas el Poder Judicial en el marco del artículo 16 de la Ley N° 26.589. Asimismo, se realizan mediaciones a distancia y con personas domiciliadas en el extranjero a solicitud de la Defensoría Pública de la Nación y el Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes de CABA.

Los criterios de definición de la población objetivo del centro, se basan en la definición de personas en condición de vulnerabilidad establecida por las Reglas de Brasilia. En tal sentido, se establecieron los siguientes parámetros objetivos de admisión:

- Tener domicilio en CABA
- Contar con patrocinio jurídico y suministrar datos del abogado
- Contar con datos de la o las personas que se convoca a la mediación
- Si es propietario de un vehículo, el mismo debe tener más de 5 años de antigüedad y no ser de alta gama.
- Que los ingresos del grupo familiar no superen 4 salarios mínimos vitales y móviles.

Con un media de 1300 mediaciones por año, las cuales tienen un promedio histórico de acuerdos del 65%, el Centro de prevención y Resolución de Conflictos presta un servicio de



mediación con especial foco en los conflictos familiares centrados en la revinculación entre padres/madres e hijos/as.

Otras acciones desarrolladas en el marco del Centro (desarrolladas por el equipo de profesionales psicólogas):

- **Dispositivo Punto de Encuentro Familiar:** consiste en una intervención de carácter psicológico de tiempo acotado enmarcada en el proceso de mediación. Se propone como un espacio facilitador de la recuperación de un vínculo familiar interrumpido durante un lapso de tiempo prolongado (situaciones de separación por problemática de violencia, ausencias, abandonos, impedimentos de contacto, vínculo paterno-filial no constituido por dificultad para el reconocimiento de la paternidad, alejamiento entre abuelos y nietos y otros).
- **Diagnóstico de interacción familiar:** se realiza a partir de una serie de entrevistas psicológicas individuales y/o vinculares con los integrantes del grupo familiar incluyendo a los hijos y a la familia ampliada en las ocasiones necesarias. El objetivo es trazar un mapa de la trama vincular al momento de la mediación. Previa devolución individual a cada uno de los entrevistados, las conclusiones diagnósticas se vierten en la audiencia. A la vez, se sugieren alternativas de cambio subjetivo e interpersonal, se efectúan recomendaciones psicoterapéuticas y, de ser necesario, se deriva a instituciones de salud mental del ámbito público.
- **Enlace Interinstitucional:** en los casos en que se estén interviniendo otras instituciones tales como Centros de Salud Mental, Hospitales Generales, Juzgados de Familia, Equipo Interdisciplinario de la Procuración del Gobierno de la CABA, Defensorías Zonales dependientes del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Gabinetes Psicopedagógicos escolares o profesionales psicólogos o psiquiatras de obras sociales o privados, se establece comunicación en forma escrita, telefónica y/o personal con vistas a acordar estrategias conjuntas para el abordaje, acompañamiento y asistencia del grupo familiar y evitar la superposición de intervenciones.
- **Seguimiento de las familias:** se lleva a cabo cuando el diagnóstico familiar va acompañado de sugerencias acerca de pautas de vinculación, crianza, modalidades de encuentro e indicaciones psicoterapéuticas entre otras, a fin de ajustar o reformular en la siguiente audiencia los acuerdos provisorios.

Prueba Piloto de Mediación Penal Juvenil con enfoque restaurativo:



En articulación con Jueces y Fiscales de CABA, se derivan casos que involucran a jóvenes en conflicto con la ley, para el desarrollo e implementación de prácticas restaurativas que recompongan el vínculo dañado, contribuyan en la responsabilización del infractor así como en su educación y reinserción. Dichas acciones se enmarca en el proyecto realizado junto con Eurosócial y Tierra de Hombres para la construcción de un protocolo de actuación y estándares de calidad para el desarrollo de mediaciones penales juveniles. La cuales nutrirán a la Declaración Iberoamericana sobre Justicia Juvenil Restaurativa a fin de que los países de Latinoamérica se basen en ella para su implementación local y regional.

Mediación, gestión participativa de conflictos y reducción de la violencia en ámbitos penitenciarios

La Dirección Nacional de Mediación y Métodos Participativos de Resolución de Conflictos implementa el Programa de Mediación, Métodos de Gestión Participativa de Conflictos y Reducción de la violencia en ámbitos penitenciarios (Resolución N°007/11). El cual propone la implementación de la Mediación como herramienta de pacificación social que posibilite a las personas privadas de libertad el abordaje de los conflictos de manera no violenta, con sus pares y con el personal del servicio penitenciario. Dicha experiencia es única en nuestro país y consiste un punto de quiebre en el tratamiento de los conflictos penitenciarios, habilitando el empoderamiento de las partes para el abordaje participativo de las conflictivas en la comunidad penitenciaria.

El programa está centrado en la mediación entre personas privadas de libertad y sus familiares poniendo el foco en la re-vinculación familiar como paso fundamental para la reinserción social. A su vez, se prevé la capacitación de personal del Servicio Penitenciario Federal y de las personas privadas de libertad, en herramientas de resolución de conflictos en general y, en mediación en particular, con el objetivo de promover el aprendizaje y la utilización de técnicas que permitan abordar los conflictos penitenciarios de manera no violenta.

Con un promedio histórico del 65% en las mediaciones realizadas, este programa es una garantía de acceso a justicia para la población privada de libertad en establecimientos penitenciarios federales.

Actualmente, el programa alcanza ininterrumpidamente a 7 penitenciarias federales ubicadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Provincia De Buenos Aires.

1. Complejo Penitenciario Federal de CABA (ex Devoto)



2. Complejo Penitenciario Federal n° 1 de Ezeiza -Hombres Mayores-
3. Complejo Penitenciario Federal n° 4 de Ezeiza -Mujeres jóvenes adultas (18-21) y Mayores (21 en adelante)
4. Unidad 31, Centro federal de detención de mujeres Nuestra Señora del Rosario de San Nicolás - Madres con hijos menores de 4 años, embarazadas y población anglosajona
5. Complejo Penitenciario Federal n° 2 - Hombres Mayores
6. Unidad residencial n° 2 (está dentro del Complejo Penitenciario Federal n° 2) Jóvenes adultos hombres
7. Unidad Residencial n° 1 (ex Unidad 24) Jóvenes Adultos

Se trabaja con todos los internos sin importar el delito que cometieron, con excepción de los condenados por delitos de lesa humanidad.

Facilitación de conflictos sociales complejos (Programa Acción Sin Daño):

La resolución pacífica de los conflictos, es un derecho de todas las personas siendo responsabilidad de los Estados generar dispositivos y estrategias que garanticen el acceso a la justicia de toda la población. En este sentido, desde el programa Acción sin Daño se trabaja para generar capacidades en el Estado a fin de gestionar pacífica y participativamente los conflictos sociales complejos (Conflictos que involucran a Gobiernos, Empresas y Comunidades Vulnerables), mediante la consolidación de instancias de diálogo facilitado y la formación de operadores estatales capacitados a fin de contribuir a la generación de una justicia más sustentable y acorde a las necesidades de las partes evitando la judicialización de conflictos sociales, las escaladas de violencia y el abordaje represivo de las conflictivas públicas.

El programa Acción Si Daño se enmarca en Las Reglas de Brasilia, incorporadas en el sistema de justicia por medio de una Acordada de la Corte Suprema de Justicia (ACORDADA N° 5/2009 EXPTE. N° 821 /2009) la cual dispone que dichas reglas deberán ser seguidas -en cuanto resulte procedente- como guía en los asuntos a que se refieren. El objetivo de las mismas es establecer líneas de actuación para los Poderes Judiciales, con el fin de brindar a las personas en condición de vulnerabilidad un trato adecuado a sus circunstancias particulares.

El programa se estructura en tres instancias de intervención:



1. Sensibilización a operadores de la Justicia (Jueces, Fiscales, Defensores) respecto a la importancia de convocar y desarrollar instancias de diálogo facilitado en conflicto sociales complejos judicializados.
2. Cursos de formación de facilitadores en conflictos públicos dirigido a miembros de organismos de los poderes ejecutivos (Nacional y Provinciales)
3. Intervención directa en proceso de facilitación por parte del equipo técnico de la Dirección Nacional de Mediación y Métodos Participativos de Resolución de Conflictos.

Asistencia legal y técnica a los poderes Ejecutivos de las Provincias para la implementación de métodos adecuados de acceso a justicia

Desde la Dirección Nacional de Mediación y MPRC se trabaja para Mejorar el sistema de justicia brindando asistencia legal y técnica en: mediación (prejudicial y judicial), conciliación laboral y conciliación en relaciones de consumo.

En el marco de dicha asistencia la Dirección Nacional dispone de instancias de formación y actualización de práctica en Mediación, Conciliación laboral, Conciliación de Consumo y arbitraje para mejorar el desempeño de los profesionales que implementan métodos participativos de resolución de conflictos en las provincias.

Generación de capacidades estatales, y de la sociedad civil, para la prevención y resolución pacífica de conflictos

A fin de contribuir en el desarrollo de capacidades estatales, y de la sociedad civil, para garantizar la implementación de métodos adecuados de acceso a Justicia la Dirección Nacional de Mediación y MPRC lleva a cabo instancias de formación en Métodos Participativos de Resolución de Conflictos para su implementación en distintos ámbitos:

Capacitación a operadores de los poderes judiciales: capacitación a miembros del Poder Judicial respecto a la importancia y beneficios de la utilización de la mediación y los métodos participativos de resolución de conflictos, para evitar llegar a la etapa de adjudicación o heterocomposición.

- Formación de Mediadores Comunitarios: Capacitación de agentes estatales y miembros de organismos de la sociedad civil para su formación como mediadores comunitarios.
- Formación en métodos participativos de resolución de conflictos y prácticas restaurativas a miembros de la comunidad educativa: capacitación dirigida a



docentes, directivos, estudiantes, padres y personal no docente para la generación de instancias de prevención y resolución participativa de los conflictos escolares.

- Formación en métodos participativos resolución de conflictos para referentes barriales: capacitación a referentes barriales en herramientas propias de la mediación comunitaria y los métodos participativos de resolución de conflictos para la prevención de conflictos vecinales y la derivación de los mismos a centros de mediación comunitaria u otros organismos especializados.
- Formación para mujeres en herramientas participativas de resolución de conflictos con perspectiva de género: Capacitación brindada por la Dirección Nacional de Mediación y Métodos Participativos de Resolución de Conflictos en articulación con el Ministerio de Desarrollo Social de Nación a través del Programa “Hacemos Futuro”. Esta capacitación pretende brindar herramientas conceptuales e instrumentales sobre facilitación y gestión de conflictos comunitarios desde una perspectiva de género a mujeres en situación de vulnerabilidad (madres de familias numerosas, con hijos con discapacidad o víctimas de violencia de género), que permita su empoderamiento para pensarse como sujetos capaces de incidir en la realidad de sus comunidades y, desde ahí, transformarla.
- Asistencia técnica organismos públicos y de la sociedad civil para la apertura de centros de mediación Comunitaria.

Garantizar el adecuado funcionamiento de la mediación prejudicial, la conciliación laboral y la conciliación en relaciones de consumo en CABA

En el marco de la Ley 26.589, la Dirección nacional de mediación y MPRC regula el adecuado funcionamiento de la medición prejudicial, la conciliación laboral y la conciliación en Relaciones de Consumo, mediante la administración de los siguientes registros:

REGMED (Registro Nacional de Mediación): Integrado por los siguientes capítulos:

- a) Registro de Mediadores: La dirección nacional de mediación y MPRC tiene a su cargo la autorización, habilitación y control sobre el desempeño de los mediadores. Actualizar permanentemente el listado de Mediadores Prejudiciales en cuanto a matrículas, capacitación continua, desempeño, oficinas y situaciones que revistan los mediadores inscriptos. El cual es remitido periódicamente al Poder Judicial de la Nación. A su vez está compuesto por los siguientes apartados: Registro de Mediadores y Registro de Mediadores Familiares.



- b) Registro de Entidades Formadoras: Tiene a su cargo la autorización, habilitación y control sobre el funcionamiento de las entidades dedicadas a la formación básica y capacitación continua de los mediadores.

RENACLO (Registro de Conciliadores Laborales): En este registro, la Dirección Nacional tiene las siguientes competencias:

- a) Autorización y habilitación de Conciliadores Laborales.
- b) Actualizar permanentemente el listado de Conciliadores Laborales en cuanto a matrículas, capacitación continua, desempeño, oficinas y situaciones que revistan los conciliadores inscriptos. El cual es remitido periódicamente al Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (SECLO), dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
- c) Aplicar medidas disciplinarias basadas en denuncias de interesados o del SECLO.

RENCCO (Registro Nacional de Conciliadores en las Relaciones de Consumo): En este registro, la Dirección Nacional tiene las siguientes competencias:

- a) Autorización y habilitación de Conciliadores en Relaciones de Consumo.
- b) Actualizar permanentemente el listado de Conciliadores en Relaciones de Consumo en cuanto a la capacitación continua, desempeño, oficinas y situaciones que revistan los conciliadores inscriptos. El cual es remitido periódicamente al Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo (COPREC) dependiente del Ministerio de Producción.
- c) Habilitar a conciliadores de consumo autorizados por la autoridad de aplicación para desempeñarse en las dependencias, delegaciones u oficinas que ésta establezca
- d) Inscribir en un registro especial a aquellos conciliadores de consumo que conformen los respectivos registros locales correspondientes a esta materia.
- e) Aplicar medidas disciplinarias basadas en denuncias de interesados o del COPREC.

### **Comisión Nacional Coordinadora de Acciones para la Elaboración de Sanciones de la Violencia de Género (CONSAVIG)**

De entre los Objetivos Estratégicos del Plan de Acción de Beijing pueden mencionarse:

- Objetivo Estratégico A1 (58 B, K)
- Objetivo Estratégico C1 (106 G, J, K)
- Objetivo Estratégico C2 (107 D, Q)



- Objetivo Estratégico D1 (124 A, B, D, F, G, H, K, L, N, Q; 125 E, H, J)
- Objetivo Estratégico D2 (129 A, B)
- Objetivo Estratégico H1 (203 C)
- Objetivo Estratégico H2 (204 C)
- Objetivo Estratégico H3 (206 A; 207 D)
- Objetivo Estratégico I1 (230 H, I, M, N)
- Objetivo Estratégico I2 (232 A, C, F, N)
- Objetivo Estratégico I3 (233 C, E)
- Objetivo Estratégico J2 (243)

En lo concerniente a los ODS:

- Objetivo 3 (3.7)
- Objetivo 5 (5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.c)
- Objetivo 16 (16.1, 16.2, 16.3, 16.10, 16.b)

Entre las modalidades de Violencia contra las Mujeres que estableció la Ley Nacional N° 26485, la violencia obstétrica es una de las más naturalizadas.

En atención a eso la CONSAVIG constituyó y coordina una Mesa de Trabajo de la que participan otros organismos del Estado Nacional que tienen injerencia en el tema con el objetivo de visibilizarla y prevenirla.

Como resultado de esa tarea conjunta, la CONSAVIG puso a disposición de las mujeres que sienten que el personal de salud incumplió lo establecido por la Ley Nacional N°25929 (de Parto Respetado) durante el parto, parto y posparto o postaborto, la posibilidad de efectuar una denuncia administrativa contra el efector de salud donde fue atendida y su obra social, si la tuviese.

La denuncia luego de ser registrada con fines estadísticos se deriva, para su tramitación, al organismo idóneo para intervenir en cada caso (Superintendencia de Servicios de Salud, INADI, etc.). Luego de completada la misma, el organismo puede elaborar un dictamen con recomendaciones para la institución y eventualmente la Obra Social.

De este modo se logró obtener datos concretos de las formas más comunes en las que se vulneran los derechos a través de la violencia obstétrica y, con el uso de reclamos administrativos, informar y solicitar información respecto de los protocolos de las clínicas y hospitales. Los resultados cuantitativos más sobresalientes de este trabajo en 2017 fueron: el 79% de las denunciantes dicen haber recibido trato deshumanizante, el 42%





medicalización y patologización, el 43% denuncia falta de información, el 33% no respeto de sus decisiones por parte del equipo médico, entre otros.

En el primer semestre de 2018, el 89% de las denunciantes sufrieron trato deshumanizante, el 39% sufrieron tanto medicalización, patologización, como falta de información y no respeto por sus decisiones, entre otros datos. Para el segundo semestre de 2018, el 21% denuncian trato deshumanizado; 17% falta de información; 17% que no se respetaron sus decisiones al momento del parto; a un 12% no se le permitió el contacto con el/la hijo/a; entre otros datos.

Adicionalmente, impulsa desde el año 2013 una campaña para visibilizar la violencia contra las mujeres que implican las elecciones de reinas, concursos de belleza, bikini open y similares eventos, y ha prestado asesoramiento en la elaboración de proyectos normativos para su eliminación.

Por otro lado, se están articulando acciones con la Dirección Nacional de Promoción y Fortalecimiento para el acceso a la Justicia a fin de brindar asesoramiento y facilitar la gestión de reclamos por violencia obstétrica y violencia simbólica a través de los CAJ.